

## GOBIERNO DE PUERTO RICO

18<sup>va</sup> Asamblea  
Legislativa1<sup>ra</sup> Sesión  
Ordinaria

## SENADO DE PUERTO RICO

**P. del S. 278**

25 de enero de 2017

Presentado por los señores *Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago*; la señora *Laboy Alvarado*; los señores *Laureano Correa; Muñiz Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas*; las señoras *Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez*; los señores *Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia*; las señoras *Vázquez Nieves y Venegas Brown*

*Referido a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas*

**LEY**

Para crear la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico a los fines de establecer los mecanismos para que el Gobierno de Puerto Rico satisfaga sus obligaciones reconociendo a su vez la responsabilidad de proveer servicios esenciales a los residentes de Puerto Rico; para proveer facultades al Gobernador con el objetivo de viabilizar los mecanismos necesarios para que el Gobierno de Puerto Rico pueda salir de la situación de emergencia; así como para reconocer al Gobernador la facultad de delegar estas funciones en algún componente de la Rama Ejecutiva; para derogar los Capítulos 1 y 2 de la Ley de Moratoria de Emergencia Fiscal y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, Ley Núm. 21-2016, según enmendada; para añadir el artículo 23, a la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, a los fines de establecer que en cuanto a las enmiendas que se realizaron mediante la Ley 21-2016 a su Ley Orgánica en caso de conflicto entre el idioma inglés y español, el idioma inglés prevalecerá; y para reenumerar el artículo 23 como 24 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada; disponer que el texto en inglés prevalecerá sobre el español y para otros fines relacionados.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

## I. Declaración de intención

La 18<sup>va</sup>. Asamblea Legislativa ha iniciado sus labores en momentos en que Puerto Rico se encuentra en medio de una crisis financiera y económica crónica y sistémica. El 30 de junio de 2016 el Presidente Barack Obama firmó la ley denominada *Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act*, conocida como PROMESA (por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187. PROMESA fue promulgada de conformidad con la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución de

los Estados Unidos de América, la cual confiere al Congreso la potestad de disponer y establecer todas las reglas y reglamentos que sean necesarios para los territorios. PROMESA estableció una Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico (“Junta de Supervisión Fiscal”) para disponer un método mediante el cual el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades alcancen la responsabilidad fiscal y logren acceder a los mercados de capital. El 30 de octubre de 2016, la Junta de Supervisión Fiscal designó a Puerto Rico, al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, al Sistema de Retiro de la Judicatura, al Sistema de Retiro para Maestros, a la Universidad de Puerto Rico y veintiuna corporaciones públicas de Puerto Rico como “entidades cubiertas” sujetas a supervisión fiscal a tenor con PROMESA. La Sección 405(b) de PROMESA impone además una paralización temporera de los litigios y las reclamaciones contra Puerto Rico y sus instrumentalidades sobre distintos asuntos (según puedan ser ampliados conforme a PROMESA, la “Paralización en virtud de PROMESA”), con la esperanza de que el Gobierno de Puerto Rico, a nombre propio y a nombre de sus instrumentalidades, entable negociaciones voluntarias con sus acreedores para reorganizar y transigir el repago de sus obligaciones de deuda y simultáneamente emprenda una reestructuración responsable del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades que reajuste los servicios esenciales requeridos para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico con el repago puntual de sus obligaciones de deuda. Conforme a PROMESA, las continuas acciones de planificación fiscal, las acciones presupuestarias, legislativas y ejecutivas de Puerto Rico, así como las reestructuraciones de deuda, consensuales o no, y la emisión, garantía, intercambio, modificación, recompra o redención de deuda están sujetas a supervisión.

Esta ley que se conocerá como la Ley para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico (la “Ley”) pretende facilitar y fomentar un proceso de negociación voluntaria conforme a PROMESA entre el Gobernador y/o la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, y los acreedores del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Esta Ley autoriza al Gobierno de Puerto Rico, dentro de los parámetros establecidos por PROMESA, a designar ciertos servicios necesarios para la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico que son prestados por el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades como “servicios esenciales” con arreglo a la Constitución de Puerto Rico.

Con la aprobación de esta Ley, la Asamblea Legislativa remueve obstáculos significativos y contenciosos a las negociaciones voluntarias con los acreedores del Gobierno. En específico, esta Ley enmienda y deroga partes de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de

Puerto Rico, Ley Núm. 21-2016, según enmendada por la Ley Núm. 40-2016 y la Ley Núm. 68-2016 (la “Ley de Moratoria”). La Ley de Moratoria y las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador de conformidad con la Ley de Moratoria (las “Órdenes Ejecutivas”) le permitían al Gobierno detener el pago puntual de sus obligaciones antes de la promulgación de PROMESA. La aprobación de PROMESA, sin embargo, ha establecido procesos y términos de tiempo puntuales para la resolución de la emergencia financiera del Gobierno que tienen prelación sobre las disposiciones de la Ley de Moratoria y las dejan sin efecto. Con PROMESA y el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal se le han dado a Puerto Rico las herramientas para establecer disciplina fiscal, reestructurar su deuda y ofrecerle una nueva oportunidad al Territorio.

La promulgación de la Ley de Moratoria y la emisión de algunas de las Órdenes Ejecutivas han producido además litigios significativos incoados por acreedores del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Estos litigios son costosos y consumen los recursos necesarios para salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico y para hacer crecer la economía del Territorio, además, impiden las negociaciones voluntarias con los acreedores. Con el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal y el requisito de PROMESA de que la Junta de Supervisión Fiscal prepare un plan fiscal conforme a PROMESA, es imprescindible que esta Asamblea Legislativa y el Gobierno de Puerto Rico dirijan rápidamente su atención a colaborar con la Junta de Supervisión Fiscal para garantizar un proceso de negociación y transacción voluntaria (en lugar de uno impuesto sobre el Territorio) para el Gobierno de Puerto Rico y sus acreedores. Sin concederle primero una oportunidad al Gobierno de Puerto Rico de emprender unos intentos significativos para alcanzar una resolución consensual con sus acreedores, la cual es necesaria para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico, PROMESA ordena que la Junta de Supervisión Fiscal imponga una resolución al Territorio.

La Sección 204(c)(3) de PROMESA confiere a la Junta de Supervisión Fiscal la facultad de derogar cualesquiera leyes promulgadas entre el 4 de mayo de 2016 y el 30 de septiembre de 2016 (esta última fecha es la fecha en que la Junta de Supervisión Fiscal y su Presidente asumieron sus cargos) y que permitan la transferencia de cualesquier fondos o bienes fuera del curso ordinario de los negocios o que sean incongruentes con la Constitución de Puerto Rico o las leyes de Puerto Rico (el “Periodo de Derogación”). Esta Asamblea Legislativa y el nuevo Gobernador de Puerto Rico, actuando de buena fe y con la intención de facilitar negociaciones lideradas por el Gobierno con los acreedores del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades sostienen que resulta en el mejor interés de Puerto Rico derogar leyes que sean incongruentes con PROMESA y que impidan un

proceso de negociación voluntaria con los acreedores del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. En consecuencia, esta Ley: (i) deroga partes significativas de la Ley de Moratoria; (ii) suspende o cancela, o ambas, todas las asignaciones especiales no presupuestadas en el año fiscal en curso que puedan haber sido aprobadas para múltiples años en años fiscales anteriores, y (iii) autoriza la re-designación de fondos especiales que no se consideran parte del fondo general como parte del fondo general.

Según datos provistos por el Departamento del Tesoro, Puerto Rico sufre una contracción económica de 14.6% en el Producto Estatal Bruto (PEB real) con una proyección de una contracción adicional de 3% para los próximos 2 años. Por años, el Gobierno ha operado con un déficit estructural el cual ha sido financiado con emisiones de bonos y préstamos al Banco Gubernamental de Fomento. Hace más de 1 año que el Gobierno carece de liquidez y se han estado utilizando los reintegros, pagos de los contratistas, el dinero de los pensionados y préstamos intra-gubernamentales para sustituir las fuentes de liquidez.

El acceso a la información financiera del Gobierno, así como la preparación de proyecciones adecuadas se ha visto afectado por una estructura gubernamental fraccionada y sistemas gubernamentales obsoletos. Los recaudos son consistentemente sobreestimados y continúan disminuyendo a pesar de que se impusieron múltiples nuevos impuestos. El Banco Gubernamental de Fomento incumplió sus obligaciones con los bonistas desde el 1 de mayo de 2016 y ya no cumple su rol de proveer liquidez. La cartera de obligaciones de Puerto Rico asciende a \$66,000 millones e incluye 18 emisores distintos los cuales están en precario estado financiero. El servicio de la deuda asciende a un promedio de \$3,500 millones y consume más de una cuarta parte de las fuentes de ingresos. Los sistemas de retiro están prácticamente insolventes con una deuda de \$50,000 millones de dólares. La anterior se agrava por la reducción poblacional ocasionada por la ola migratoria que comenzó en el 2006 y que se convierte en uno de los retos para encaminarnos hacia la recuperación.

Ante este tétrico cuadro, es hora de enrollarnos las mangas y trabajar arduamente por el bienestar de Puerto Rico. Nos corresponde construir un nuevo Puerto Rico e implementar una administración y política pública que deje de improvisar y administrar las finanzas de año en año, y empezar a abordar el desequilibrio a largo plazo entre el gasto y los ingresos. Nuestro compromiso en el Plan para Puerto Rico es atender de manera responsable estas situaciones y devolverle la credibilidad a nuestra Isla. Tenemos que mirar hacia el futuro y anticipar estos desafíos en lugar de simplemente sobrevivir de una crisis a la siguiente. Los líderes y funcionarios de los componentes gubernamentales de Puerto Rico deben concentrarse en equilibrar los gastos y los ingresos, reducir

el nivel de intervención gubernamental en la economía de Puerto Rico y proporcionar un ambiente de negocios competitivo, donde impere la buena fe, para que los inversionistas y empresarios locales y externos lideren el camino hacia la recuperación económica. Las políticas del pasado llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar PROMESA, que delega en una Junta de Supervisión Fiscal la facultad de trabajar con el Gobierno de Puerto Rico para sacarnos de la crisis por la que atravesamos. A esos efectos, el 20 de diciembre de 2016, la Junta Supervisión Fiscal ha solicitado como prioridades de Puerto Rico el incluir un plan y compromiso para implementar cambios significativos dirigidos a:

- Restaurar el crecimiento económico y crear una economía más competitiva. A corto plazo, se debe liberalizar el mercado laboral y los programas de ayuda social, reducir el costo energético, racionalizar y optimizar los impuestos y mejorar el proceso de permisos para promover la inversión.
- Restructurar el Gobierno para obtener presupuestos balanceados mientras se mantienen los servicios esenciales para los puertorriqueños.
- Restructurar el sistema de pensiones conforme a PROMESA y restablecer el acceso a los mercados capitales.

Para ello, es preciso hacer cambios sin precedentes que hagan un gobierno más eficiente y fiscalmente responsable. Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016 recoge medidas para lograr responsabilidad fiscal y desarrollar la economía de la Isla.

## II. Trasfondo.

### A. Aprobación de la Ley de Moratoria

El 6 de abril de 2016, el entonces Gobernador Alejandro García Padilla (“Gobernador García Padilla”) firmó la Ley de Moratoria. Cuando aprobó la Ley de Moratoria, la 17<sup>ma</sup> Asamblea Legislativa hizo ciertas determinaciones, según se refleja en el Artículo 108 de la Ley de Moratoria, en el sentido de que el Gobierno debía priorizar el pago de servicios esenciales sobre el servicio a la deuda.

La Ley de Moratoria se promulgó en un momento en que no se había completado aún una acción por parte del Congreso federal que atendiera la crisis financiera de Puerto Rico.

La Ley de Moratoria tenía cuatro objetivos principales. El primero, establecido en el Capítulo 2 de la Ley de Moratoria, autorizaba al Gobernador a: (i) declarar una moratoria en los pagos del servicio a la deuda por un periodo temporero para el Gobierno de Puerto Rico, el Banco

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (“BGF”), el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, o cualquier otra instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, y (ii) suspender los remedios de los acreedores que pudiesen surgir como resultado de la moratoria. El segundo objetivo, establecido en los Capítulos 3 y 4 de la Ley de Moratoria, era enmendar la Ley Orgánica del BGF para proporcionarle al BGF opciones y herramientas para atender sus propias dificultades financieras. Estas enmiendas (a) modernizaban la Ley Orgánica del BGF en lo que respecta al nombramiento de un síndico para el BGF y (b) autorizaban la creación de un banco “puente” temporero para llevar a cabo ciertas funciones del BGF y para honrar depósitos. El tercer objetivo, establecido en el Capítulo 5 de la Ley de Moratoria, era enmendar la Ley Orgánica del BDE para modernizar las disposiciones sobre el nombramiento de un síndico para el BDE. El cuarto objetivo, establecido en el Capítulo 6 de la Ley de Moratoria, era crear la Autoridad de Asesoría Fiscal y Financiera de Puerto Rico. La nueva Administración promulgó una ley que deroga el Capítulo 6 de la Ley Núm. 21-2016 y creó una nueva Autoridad, con amplios poderes, conocida como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Ley Núm. 2-2017.

#### B. Declaración de Estado de Emergencia del Estado Libre Asociado y Ciertas Entidades Gubernamentales

Luego de que se promulgara la Ley de Moratoria, el Gobernador García Padilla emitió varias órdenes ejecutivas conforme a la autoridad que le confería la Ley de Moratoria. Como parte de las Órdenes Ejecutivas, el Gobernador García Padilla declaró un estado de emergencia para el Estado Libre Asociado (EO 2016-30); el BGF (EO 2016-10); la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (“AFI”) (EO 2016-14), la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”) (EO 2016-17); la Autoridad de Edificios Públicos (“AEP”) (EO 2016-30); la Autoridad Metropolitana de Autobuses (“AMA”) (EO 2016-30); la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (“ADCC”) (EO 2016-31); el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus Instrumentalidades (“Sistema de Retiro”) (EO 2016-31); la Compañía de Fomento Industrial (“PRIDCO”) (EO 2016-31); la Universidad de Puerto Rico (“UPR”) (EO 2016-31); y la Corporación para el Financiamiento Público (“PFC”) (EO 2016-31). Las Órdenes Ejecutivas EO-2016-17 y EO-2016-29 excluyen a la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) del alcance de la Ley de Moratoria.

La derogación de partes de la Ley de Moratoria, inclusive de aquellas partes que establecen periodos de emergencia y la paralización de litigios, no deben exponer al Gobierno a más litigios incoados por los acreedores. La Sección 405 de PROMESA concede una paralización temporera de los litigios para facilitar las negociaciones voluntarias entre el Gobierno y sus acreedores. Con la derogación de los periodos de emergencia y la paralización de los litigios bajo la Ley de Moratoria, esta Asamblea Legislativa y el Gobernador están comunicando su deseo de emprender negociaciones voluntarias con los acreedores del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades en lugar de gastar más recursos y tiempo litigando mociones procesales que no ayudan a facilitar una transacción y reestructuración justa ni a atender la necesidad extrema de crecimiento económico y de servicios efectivos y eficientes que tiene el pueblo del Territorio.

**DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

1 **CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES**

2 **Artículo 101. Título Corto**

3 Esta ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley para la Emergencia Financiera y  
4 Responsabilidad Fiscal de 2017”.

5 **Artículo 102. Declaración de Emergencia Financiera**

6 Por la presente se determina y declara que la grave emergencia que la Asamblea Legislativa  
7 ha identificado y declarado en numerosas ocasiones continúa empeorando, que esta continua  
8 emergencia financiera y el impacto que ha producido en la solvencia del Gobierno de Puerto Rico y  
9 sus instrumentalidades continúan afectando significativa y adversamente la capacidad de cumplir  
10 con las obligaciones financieras y salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar de los residentes de  
11 Puerto Rico; y que resolver la emergencia financiera y establecer responsabilidad fiscal dentro del  
12 Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades es indispensable para garantizar que se provean  
13 aquellos servicios gubernamentales que son esenciales para salvaguardar la salud, seguridad y el  
14 bienestar de los residentes de Puerto Rico.

1           Esta continua emergencia financiera ha sido reconocida por el gobierno de los Estados  
2 Unidos mediante la promulgación de la ley conocida como *Puerto Rico Oversight, Management,*  
3 *and Economic Stability Act*, Pub. L. 114-187 (“PROMESA”), la cual establece, entre otras cosas,  
4 medidas para asistir al Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades a alcanzar la  
5 responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital.

6           En el proceso de aprobar PROMESA, el Congreso de los Estados Unidos determinó que la  
7 combinación de un descenso severo de la economía y, ocasionalmente, déficits operacionales  
8 acumulados, falta de transparencia financiera, ineficiencias administrativas y préstamos excesivos  
9 crearon una emergencia fiscal en Puerto Rico y como resultado de su emergencia fiscal, el Gobierno  
10 de Puerto Rico no ha podido garantizar su continua operación y proveer servicios esenciales de  
11 manera efectiva a los residentes de Puerto Rico.

12           Existen ciertos derechos, poderes y obligaciones generales de Puerto Rico, fundamentados o  
13 impuestos en la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico, el derecho  
14 estatutario y la equidad, que surgen como resultado de tal emergencia; y ciertos derechos, poderes y  
15 obligaciones adicionales conferidos o impuestos por PROMESA y el ejercicio por parte del  
16 Congreso de los Estados Unidos de sus poderes bajo la cláusula territorial. En vista de la continua  
17 emergencia financiera y de la promulgación de PROMESA, la Asamblea Legislativa tiene la  
18 responsabilidad de ejercer su poder de razón de estado de forma tal que se reconozca la  
19 responsabilidad de satisfacer las obligaciones financieras del Gobierno de los Estados Unidos y sus  
20 instrumentalidades, mientras se continúan proveyendo servicios gubernamentales esenciales para  
21 salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico dados los limitados  
22 recursos disponibles del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, todo esto de manera  
23 congruente con PROMESA. En el ejercicio de su poder de razón, la Asamblea Legislativa reconoce  
24 además la necesidad de remediar la emergencia financiera asegurando un manejo fiscal prudente,



1 una administración eficiente y la prestación de servicios esenciales y permitiendo al mismo tiempo  
2 la negociación con los acreedores y la reestructuración de las obligaciones contractuales.

3 La Asamblea Legislativa declara además que el Gobernador de Puerto Rico también debe  
4 estar completamente autorizado para ejercer la responsabilidad del Gobernador de salvaguardar la  
5 salud, seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico y confiere al Gobernador con  
6 carácter de emergencia el ejercicio del poder de razón de Estado conforme a esta Ley, incluyendo,  
7 pero sin limitarse a los poderes relacionados con la identificación de aquellos servicios esenciales  
8 para la salud, seguridad y bienestar de Puerto Rico; garantizar la administración eficiente y efectiva  
9 del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades; y la supervisión y dirección de los asuntos  
10 fiscales del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.

### 11 **Artículo 103. Definiciones**

12 Las siguientes palabras y términos, cuando se usen en esta Ley, tendrán los significados que  
13 se establecen a continuación:

- 14 (a) “Ley” significa esta Ley para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de  
15 Puerto Rico de 2017.
- 16 (b) “Autoridad” significa la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto  
17 Rico.
- 18 (c) “AFICA” significa la Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de  
19 Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental.
- 20 (d) “Acuerdo con Acreedores” – significa un acuerdo otorgado entre una entidad  
21 gubernamental y ciertos acreedores de dicha entidad gubernamental, incluyendo, pero  
22 sin limitarse a un acuerdo consensual en apoyo a la reestructuración de su deuda,  
23 según sea enmendado, suplementado o reinstalado de tiempo en tiempo,  
24 independientemente de que el mismo esté titulizado o no.

- 1 (e) “AMA” significa la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
- 2 (f) “Recursos disponibles” tiene el significado que se le da a dicho término para  
3 propósitos de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico.
- 4 (g) “Banco” significa uno de los siguientes o ambos—
- 5 i. el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, y
- 6 ii. el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.
- 7 (h) “Junta” significa la Junta de Directores de cada Banco.
- 8 (i) “Reclamación de bono” (*bond claim*), para propósitos del Artículo 206, tiene el  
9 significado del término según se define bajo la Sección 5 de PROMESA.
- 10 (j) “ADCC” significa la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto  
11 Rico.
- 12 (k) “Fideicomiso de los Niños” significa la entidad sin fines de lucro creada por el  
13 Territorio de conformidad con la Ley del Fideicomiso de los Niños, Ley Núm. 173-  
14 1999, según enmendada.
- 15 (l) “COFINA” significa la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto  
16 Rico.
- 17 (m) “Instrumento de deuda” incluye cualquier documento o instrumento para, utilizado en  
18 relación con, o relacionado a:
- 19 i. cualquier obligación de pagar el principal o la prima, si alguna, de cualquier  
20 interés, penalidad, reembolso, indemnización, cargo, gasto o cualquier otra  
21 cantidad relacionada con cualquier endeudamiento, y cualquier otra  
22 obligación, sea contingente o no,
- 23 a. por dinero tomado a préstamo,

- 1           b.     evidenciada por bonos, pagarés, instrumentos de fideicomiso  
2                     (*indentures*), notas, resoluciones, cualquier contrato de préstamo o  
3                     financiamiento, valores o cualquier instrumento similar o  
4           c.     por una carta de crédito o fianza de cumplimiento;
- 5           ii.    cualquier obligación contingente respecto de, o relacionada con, cualquier  
6                     pasivo de la clase descrita en la cláusula anterior (i), incluyendo, pero sin  
7                     limitarse a cualquier garantía de tal responsabilidad y de cualquier acuerdo de  
8                     reembolso con respecto a una póliza de seguro que cubra dicha obligación;
- 9           iii.   cualquier obligación relacionada con alguna aceptación bancaria (*banker's*  
10                    *acceptance*);
- 11          iv.    cualquier obligación con relación a un acuerdo de intercambio de tasas de  
12                     interés, contrato derivado o acuerdo relacionado, contrato de cobertura (*hedge*  
13                     *agreement*), contrato de valores, contrato de entrega futura (*forward*), acuerdo  
14                     de recompra, opción, promesa (*warrant*), contrato de materia prima  
15                     (*commodity*) u otro instrumento similar;
- 16          v.     cualquier y todo aplazamiento, renovación, extensión y refinanciamiento de  
17                     cualquier obligación de los tipos descritos en las cláusulas (i) a (v) o  
18                     enmiendas, modificaciones o suplementos a dicha obligación;
- 19          vi.    cualquier obligación que surja de cualquier sentencia relacionada a cualquier  
20                     obligación del tipo que se describe anteriormente en las cláusulas (i) a (iv); o
- 21          vii.   cualquier obligación que surja de una obligación de asegurar relacionada a  
22                     cualquier obligación del tipo descrito en este artículo.

23           Disponiéndose que “instrumento de deuda” no incluye ningún contrato para la  
24           prestación de bienes o servicios, ni incluye ningún acuerdo de servicio de

1           compensación (*clearing*) u otro acuerdo conforme al cual una institución financiera  
2           provea servicios al Banco o a cualquier otra entidad gubernamental.

3           (n)    “Depósito” significa los fondos en custodia del Banco que sean clasificados por  
4           dicho Banco como depósitos.

5           (o)    “Depositante” significa cualquier persona, o su representante autorizado, que sea el  
6           dueño primario o beneficiario de cualquier cuenta que contenga depósitos en poder  
7           del Banco.

8           (p)    “Institución Depositaria” significa, para propósitos de esta Ley, los bancos y  
9           cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, y la Corporación Pública para la  
10          Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (“COSSEC”), como  
11          aseguradora de las acciones y los depósitos de las cooperativas de ahorro y crédito.

12          (q)    “Periodo de Emergencia” significa el periodo que comienza en la fecha de efectividad  
13          de esta Ley y que termina el 1 de mayo de 2017, término que el Gobernador podrá  
14          extender por tres (3) meses adicionales conforme a una orden ejecutiva.

15          (r)    “Sistema de Retiro” significa el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del  
16          Territorio y sus Instrumentalidades.

17          (s)    “Servicios esenciales” significa un servicio prestado por el Territorio o una  
18          instrumentalidad del Territorio identificado por el Gobernador en el Capítulo 2 de  
19          esta Ley como un servicio esencial para salvaguardar la salud, seguridad y el  
20          bienestar público de los residentes de Puerto Rico.

21          (t)    “Buena fe”, para propósitos del Artículo 206, significa la participación de una parte  
22          interesada en un proceso de evaluación neutral con la intención de negociar una  
23          resolución de los asuntos sujetos al proceso de evaluación neutral, incluyendo el  
24          suministro oportuno de información completa y precisa para proveerles a los

1 participantes relevantes, mediante el proceso de evaluación neutral, suficiente  
2 información, de manera confidencial, para negociar el reajuste de una obligación de  
3 deuda.

4 (u) “Entidad gubernamental” significa Territorio, AFICA, AMA, cada Banco y cualquier  
5 subsidiaria del mismo, ADCC, COFINA, Sistema de Retiro, AFV, ACT, AEP, PFC,  
6 AAA, AEE, PRIDCO, AFI, AP, la UPR y cualquier otra entidad pública o  
7 instrumentalidad del Territorio designada por la Junta de Supervisión Fiscal como  
8 una entidad cubierta y sujeta a la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal.

9 (v) “Gobernador” significa el Gobernador del Territorio de conformidad con el Artículo  
10 IV de la Constitución de Puerto Rico.

11 (w) “AFV” significa la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico.

12 (x) “ACT” significa la Autoridad de Carreteras y Transportación Pública de Puerto Rico.

13 (y) “Obligación de intereses” significa cualquier obligación que surja bajo, o que esté  
14 relacionada con el pago de intereses sobre cualquier instrumento de deuda.

15 (z) “Parte interesada”, para propósitos del Artículo 206, significa un síndico, un comité  
16 de acreedores, un acreedor afectado, un fiduciario de un contrato de bonos, un  
17 tenedor de bonos, o una aseguradora de obligaciones de deuda o un comité de  
18 aseguradoras de obligaciones de deuda.

19 (aa) “AFM” significa Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico.

20 (bb) “Proceso de evaluación neutral”, para propósitos del Artículo 206, significa un medio  
21 alternativo para resolución de disputas o mediación entre el Territorio o una  
22 instrumentalidad del territorio que se lleva a cabo de manera que promueva la toma  
23 de decisiones voluntaria y libre de coacción en el que cada participante hace  
24 selecciones libres e informadas de buena fe respecto al proceso y su resultado, y en el

1 que el evaluador neutral hace sus mejores esfuerzos para ayudar a los participantes a  
2 llegar a una resolución satisfactoria de su disputa respecto a las obligaciones de  
3 deuda.

4 (cc) “Evaluador neutral”, para propósitos del Artículo 206, significa una persona  
5 imparcial y sin prejuicios, comúnmente conocida como un mediador, que asiste al  
6 Territorio o a una instrumentalidad del Territorio y a las partes interesadas a llegar a  
7 su propio acuerdo sobre asuntos relacionados con las obligaciones de deuda del  
8 Territorio o de una instrumentalidad del Territorio.

9 (dd) “Junta de Supervisión Fiscal” o “JSF” significa la Junta de Supervisión Fiscal y  
10 Administración (*Financial Oversight and Management Board*) establecida para  
11 Puerto Rico al amparo de PROMESA.

12 (ee) “AEP” significa la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico.

13 (ff) “Persona” significa cualquier persona natural o entidad legal, incluyendo, pero sin  
14 limitarse a cualquier agencia gubernamental, departamento, instrumentalidad,  
15 corporación pública, municipio, junta, oficina, comité o dependencia, o cualquier  
16 individuo público o privado, firma, sociedad, sociedad por acciones, compañía de  
17 responsabilidad limitada, asociación o corporación organizada y existente bajo las  
18 leyes del Territorio, los Estados Unidos de América o cualquiera de sus estados, o de  
19 cualquier país extranjero, o cualquier combinación de los anteriores”..

20 (gg) “PFC” significa Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico.

21 (hh) “AAA” significa la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

22 (ii) “AEE” significa la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

23 (jj) “PRIDCO” significa la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico.

- 1 (kk) “AFI” significa la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura de Puerto  
2 Rico.
- 3 (ll) “Obligación de principal” significa cualquier obligación que surja bajo, o que esté  
4 relacionada con el pago de intereses sobre cualquier instrumento de deuda, según  
5 puedan ser debidamente ajustados para tomar en cuenta el valor acumulado en el caso  
6 de los bonos de apreciación de capital o los bonos convertibles de apreciación de  
7 capital antes de la conversión, o el descuento o la prima sin amortizar de la emisión  
8 original.
- 9 (mm) “AP” significa la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.
- 10 (nn) “PROMESA” significa la ley federal Pub. L. 114-187 denominada *Puerto Rico*  
11 *Oversight, Management, and Economic Stability Act*.
- 12 (oo) “Deuda pública” significa cualquier obligación o evidencia de deuda del Territorio, o  
13 una entidad gubernamental, con el significado provisto en la Sección 2 del Artículo  
14 VI de la Constitución de Puerto Rico.
- 15 (pp) “Territorio” significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico según quedó  
16 constituido con arreglo a la Sección 1 del Artículo de la Constitución de Puerto Rico.
- 17 (qq) “UPR” significa la Universidad de Puerto Rico.

18 **Artículo 104. Política Pública**

19 Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico tomar todas las medidas requeridas para  
20 Puerto Rico establecer la responsabilidad fiscal necesaria dentro del Gobierno y sus  
21 instrumentalidades para satisfacer sus obligaciones y garantizar que se provean aquellos servicios  
22 gubernamentales esenciales para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico.  
23 Además, es la política pública del Gobierno de Puerto Rico ejercer su poder de razón de Estado de  
24 una manera que reconozca la responsabilidad de satisfacer las obligaciones financieras del Gobierno

1 de Puerto Rico y sus instrumentalidades, mientras continúa proveyendo servicios gubernamentales  
2 esenciales para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico a la luz de los  
3 limitados recursos disponibles del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.

4 **Artículo 105. Relación con las Disposiciones Constitucionales; Supremacía Sobre Otras**  
5 **Leyes**

6 Esta Ley ha sido promulgada de acuerdo y de conformidad con la Constitución de Puerto  
7 Rico y conforme al poder de razón de Estado del Territorio y según se especifique otra cosa en esta  
8 Ley. En caso de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones de  
9 cualquier otra ley, las disposiciones de esta Ley prevalecerán. La implantación de esta Ley está  
10 sujeta a los requisitos de la Constitución de Puerto Rico y PROMESA.

11 No obstante cualquier otra cosa en contrario, si un poder o responsabilidad fuera delegado en  
12 la Autoridad conforme a la Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto  
13 Rico, Ley Núm. 2-2017, esta Ley no debe interpretarse como que afecta, altera, revoca o de otro  
14 modo modifica dicha delegación. Además, una delegación de un poder o responsabilidad conforme a  
15 la Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Ley Núm. 2-2017, no limita o de  
16 otro modo restringe el ejercicio por parte del Gobernador de los poderes o responsabilidades que se  
17 le confieren al Gobernador por esta Ley o por otro modo.

18 **Artículo 106. Inmunidades**

19 (a) Excepto en la medida en que se pruebe mediante sentencia final y firme que ha  
20 incurrido en conducta dolosa para beneficio propio o en negligencia crasa que conlleve una  
21 indiferencia temeraria hacia sus deberes, ninguna persona incurrirá en responsabilidad civil, criminal  
22 o de otro tipo y, sin necesidad de notificación u orden adicional, será exonerada por acciones u  
23 omisiones en su capacidad y dentro de su autoridad en relación con, relacionadas con, que surjan  
24 bajo, o según permitido conforme a esta Ley, y asimismo por cualquier transferencia, venta o cesión



1 de activos o retiro de fondos aprobado o llevado a cabo por una entidad gubernamental antes o  
2 después de la aprobación de esta Ley si dicha transferencia, venta, cesión o retiro de depósitos u  
3 otros fondos, según sea el caso, se declara por un tribunal en violación de esta Ley, la Ley Núm. 17  
4 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según  
5 enmendada, los artículos 1243, 1244 y 1249 del Código Civil de Puerto Rico, o alguna otra ley o  
6 disposición análoga o similar.

7 (b) Ninguna institución financiera o agente de la misma que provea servicios de  
8 compensación (*clearing*) u otro servicio financiero al Banco u otra entidad gubernamental conforme  
9 a cualquier acuerdo con el Banco o dicha entidad gubernamental incurrirá en responsabilidad civil,  
10 criminal o de otro tipo y, sin necesidad de notificación u orden adicional, será exonerada por  
11 acciones u omisiones relacionadas con dicho acuerdo, y asimismo por cualquier transferencia o  
12 retiro de depósitos u otros fondos hecho conforme a dicho acuerdo si dicha transferencia o retiro se  
13 declara por un tribunal en violación de esta Ley, la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según  
14 enmendada, la Ley Núm. 22 de 24 de junio de 1985, según enmendada, o los artículos 1243, 1244 y  
15 1249 del Código Civil de Puerto Rico, cualquier regulación u orden ejecutiva emitida conforme a  
16 esta o dichas leyes, o alguna otra ley o disposición análoga o similar.

17 (c) Cualquier institución financiera en la que se deposite un cheque emitido por cualquier  
18 entidad del gobierno o que reciba cualquier otra instrucción de una entidad gubernamental para  
19 transferir fondos tendrá derecho a honrar dicho cheque o instrucción en el curso ordinario de sus  
20 operaciones bancarias sin tener que indagar si se ha cumplido con los requisitos de esta Ley o de  
21 cualquier orden ejecutiva emitida conforme a esta Ley. El Banco y las entidades gubernamentales  
22 serán los únicos responsables por el cumplimiento con cualquier disposición de esta Ley o cualquier  
23 otra regulación u orden ejecutiva emitida conforme a esta Ley que restrinja el uso de los fondos

1 gubernamentales o la emisión de cheques u otras instrucciones relacionadas con los fondos  
2 gubernamentales depositados en instituciones financieras.

3 (d) Cualquier acción presentada por negligencia crasa será desestimada con perjuicio si:

4 (i) un demandado, como oficial, director, miembro de comité o profesional produce documentos que  
5 demuestren, con relación a cualquier acto u omisión objeto de la demanda, que dicho demandado  
6 recibió o descansó en la asesoría de expertos o recibió información sobre los hechos relevantes,  
7 participó en persona o por teléfono y deliberó de buena fe (ii) o si las acciones u omisiones que son  
8 la base de la demanda, acusación formal por un gran jurado o acusación no violan claramente un  
9 deber establecido del cual una persona razonable tendría conocimiento claro bajo las circunstancias  
10 particulares.

#### 11 **Artículo 107. Idioma que Prevalece**

12 Esta Ley se adoptará en español y en inglés. Si en la interpretación o aplicación de esta Ley  
13 surgiere algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en español, prevalecerá el texto en inglés.

### 14 **CAPÍTULO 2. PODERES DE EMERGENCIA FINANCIERA**

#### 15 **Artículo 201. Determinación sobre los Poderes de Emergencia Financiera**

16 La Asamblea Legislativa ha determinado que dada la continua emergencia financiera del  
17 Territorio, durante el Periodo de Emergencia, el Gobernador debe estar autorizado a ejercer los  
18 poderes conferidos al Gobernador bajo este artículo para designar los servicios que proveen el  
19 Territorio y sus instrumentalidades como servicios esenciales o como servicios que no son servicios  
20 esenciales y a utilizar los recursos disponibles para asegurar que se satisfagan las obligaciones del  
21 Territorio y sus instrumentalidades, al mismo tiempo que se reconoce la necesidad de salvaguardar  
22 los servicios esenciales de salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico.

#### 23 **Artículo 202. Mantener los Servicios Esenciales**

1 Durante el periodo de emergencia, el Gobernador puede emitir órdenes ejecutivas para  
2 designar la prioridad con que se usarán los recursos disponibles para pagar por los servicios  
3 esenciales que el Gobernador estime necesario para salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de  
4 los residentes de Puerto Rico, a la vez que se reconocen las obligaciones de deuda del Territorio y  
5 sus instrumentalidades.

6 **Artículo 203. Pago por Servicios Esenciales y Prioridades de Pago**

7 (a) La Asamblea Legislativa encuentra que es inapropiado priorizar categóricamente el  
8 pago de gastos que no son deuda sobre el pago del servicio a la deuda. En su lugar, durante el  
9 Periodo de Emergencia, el Gobernador deberá pagar el servicio de la deuda en la medida (a) de lo  
10 posible luego de que todos los servicios esenciales del Territorio hayan sido provistos; o (b) en que  
11 la Junta de Supervisión Fiscal, u otra junta creada bajo las leyes federales, así lo haya ordenado. En  
12 la eventualidad de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones de otras  
13 leyes, las disposiciones de esta ley prevalecerán.

14 (b) Durante el Periodo de Emergencia, el Gobernador puede emitir órdenes ejecutivas  
15 para requerir el uso de los recursos disponibles para que se deposite en una cuenta bajo el control  
16 exclusivo de la Autoridad (“lockbox account”) y pagar por servicios esenciales según el Gobernador  
17 estime necesario para proteger la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico. El  
18 Gobernador puede tomar cualquiera y todas las acciones que estime razonables y necesarias para  
19 preservar la capacidad del Territorio y de una de sus instrumentalidades para continuar brindando  
20 servicios esenciales a los residentes de Puerto Rico.

21 (c) Durante el Periodo de Emergencia, el Gobernador puede emitir órdenes ejecutivas  
22 que establezcan normas de prioridad para el desembolso de fondos públicos cuando los recursos  
23 disponibles para el año fiscal sean insuficientes para cubrir las asignaciones hechas para ese año  
24 fiscal.

1 (d) Durante el Periodo de Emergencia, no obstante lo establecido en el Artículo 4(c) de la  
2 Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, el Gobernador puede priorizar los  
3 servicios y gastos descritos en el Artículo 4(c)(3) a un nivel de prioridad más alto que el listado en el  
4 Artículo 4(c).

5 (e) Durante el Periodo de Emergencia, el Gobernador puede emitir las órdenes ejecutivas  
6 que estime necesarias o recomendables para asegurar el pago de las obligaciones de deuda del  
7 Territorio o de una instrumentalidad del Territorio.

#### 8 **Artículo 204. Medidas de Emergencia para el Banco**

9 (a) Durante el Periodo de Emergencia, el Gobernador puede tomar cualesquiera y todas  
10 la acciones que estime razonables y necesarias para permitir al Banco continuar llevando a cabo sus  
11 operaciones.

12 (b) Para los propósitos de este artículo, las acciones que son “razonables y necesarias”  
13 incluyen, sin limitación, todas las siguientes—

- 14 i. prescribir condiciones o restricciones para la manera de conducir los negocios  
15 del Banco, incluyendo otorgar dispensas para el cumplimiento, total o parcial,  
16 de cualquier requisito prescrito por otras leyes aplicables, incluyendo  
17 aquellas que requieran al Banco mantener reservas de depósitos sobre ciertos  
18 límites;
- 19 ii. ordenar la limitación, posposición o suspensión de cualquier pago, total o  
20 parcial, de una obligación a tenor con los términos que el Gobernador  
21 prescriba para atender las necesidades de liquidez del Banco o facilitar la  
22 capacidad del Banco para llevar a cabo sus operaciones;
- 23 iii. suspender—
- 24 A. los pagos de obligaciones garantizadas por el Banco;

- 1 B. pagos de cualquier carta de crédito; y
- 2 C. cualquier obligación o compromiso de aprobar préstamos o de  
3 extender fondos o crédito;
- 4 iv. tomar cualquier acción respecto al Banco según dispuesta en la Ley Núm. 17  
5 del 23 de septiembre de 1948, según enmendada, o la Ley Núm. 22 de 24 de  
6 julio de 1985, según enmendada, según aplique; y
- 7 v. delegar en el Banco, su Junta, o sus empleados la autoridad para tomar  
8 acciones para cumplir con este Artículo.
- 9 (c) Si se establece cualquier restricción sobre los desembolsos del Banco a tenor con el  
10 párrafo (a) de este Artículo,
- 11 i. el Banco no debe desembolsar ningún préstamo o facilidad de crédito a menos  
12 que sea autorizado por el Gobernador;
- 13 ii. el Banco deberá honrar las solicitudes de retiro o transferencia de cualquier  
14 depósito, incluso mediante cheque u otros medios, de una agencia,  
15 corporación pública, municipio o instrumentalidad del Territorio (que no sean  
16 las listadas en el inciso (c)(iii) de este párrafo) según puedan ser autorizadas  
17 por el Gobernador de tiempo en tiempo;
- 18 iii. sujeto a la disponibilidad de fondos y a los desembolsos agregados  
19 establecidos por el Gobernador, el Banco debe honrar cualquier solicitud para  
20 retirar o transferir cualquier depósito en su custodia hecha por, o solicitar que  
21 se honre cualquier cheque emitido por, la Rama Legislativa, la Rama Judicial,  
22 la UPR, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor Electoral, la  
23 Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, el Panel  
24 sobre el Fiscal Especial Independiente, o un municipio del Territorio; siempre

1                   y cuando un oficial autorizado de una entidad listada en este inciso certifique,  
2                   junto con documentación de apoyo, que los fondos serán usados para el pago  
3                   de servicios esenciales.

4           (d)   Salvo según dispuesto en el párrafo (e) de este artículo, si se establece alguna  
5   restricción a los desembolsos del Banco al amparo de este artículo, entonces cualquier valor  
6   desembolsado a un acreedor luego de que dicha restricción sea impuesta deberá ser restado del valor  
7   de cualquier distribución que dicho acreedor tiene derecho a recibir, a partir de la primera fecha de la  
8   restricción, si el Banco es subsecuentemente liquidado o se le nombra un síndico.

9           (e)   Los desembolsos que el Banco haga antes o durante el Periodo de Emergencia en el  
10   curso ordinario de sus operaciones, incluyendo desembolsos para cubrir gastos de la naturaleza  
11   descrita en el Artículo 12, Sección (A)(2) o (3) de la Ley Núm. 17 del 23 de septiembre de 1948,  
12   según enmendada, o para pagar por bienes y servicios prestados al Banco, deberán, para evitar  
13   dudas, en cada caso, estar exentos del Artículo 17 de la Ley Núm. 17 del 23 de septiembre de 1948,  
14   según enmendada.

15           (f) Un cheque escrito en violación de esta Ley o una orden ejecutiva emitida a tenor con esta  
16   Ley será nulo, y cualquier persona que intencionalmente escriba un cheque para retirar todo o una  
17   porción sustancial del balance de sus fondos depositados en violación a este Artículo será culpable  
18   de un delito grave sancionable con una pena de cárcel de hasta un (1) año o una multa de no menos  
19   de veinticinco mil dólares (\$25,000), o ambas.

## 20           **Artículo 205. Emisión de Evidencia de Deuda por las Entidades Gubernamentales**

21           Nada en esta Ley prohíbe o evita que cualquier entidad gubernamental, sea o no durante el  
22   Periodo de Emergencia, pueda emitir a tenedores que consienten evidencia de deuda relacionada con  
23   cualquier deuda, cualquier instrumento de deuda u otra evidencia de deuda como pago, renovación o  
24   refinanciamiento de o en intercambio de la obligación de deuda de dicho tenedor que consiente,

1 conforme a términos que por lo demás cumplan con esta Ley y con cualquier otra ley aplicable,  
2 incluyendo, pero sin limitarse a PROMESA. Se dispone, además, que dicha evidencia no puede  
3 constituir y no constituirá emisión de deuda nueva conforme a esta Ley.

#### 4 **Artículo 206. Poderes de Emergencia Adicionales del Gobernador**

5 (a) Durante el Periodo de Emergencia, esta ley confiere al Gobernador amplios poderes  
6 para nombrar síndicos a fin de rectificar la emergencia financiera declarada por esta Ley, tomar las  
7 acciones necesarias para satisfacer las obligaciones de deudas del Territorio y sus instrumentalidades  
8 y actuar para salvaguardar la prestación de servicios esenciales. El Gobernador, junto a la  
9 Autoridad, pueden tomar las siguientes acciones según el Gobernador y la Autoridad estimen  
10 necesario o recomendable para rectificar la emergencia financiera, incluyendo pero sin limitarse a:

- 11 i. analizar los factores y circunstancias que contribuyen a la emergencia  
12 financiera y tomar medidas para corregir dichos factores y circunstancias;
- 13 ii. limitar los gastos de fondos asignados;
- 14 iii. emitir órdenes ejecutivas u otras directrices relacionadas con el desembolso o  
15 disposición de fondos en poder del Banco u otra entidad gubernamental;
- 16 iv. requerir y aprobar o desaprobar, o enmendar o revisar, un plan para el pago de  
17 las obligaciones de deuda del Territorio y sus instrumentalidades;
- 18 v. requerir y prescribir la forma de los informes especiales que deberá hacer el  
19 Territorio o una instrumentalidad del Territorio a los acreedores o a la Junta  
20 de Supervisión Fiscal;
- 21 vi. examinar todos los récords y libros contables de una entidad gubernamental y  
22 requerir la comparecencia de testigos y la producción de libros, papeles,  
23 contratos y otros documentos pertinentes para el análisis de la condición  
24 financiera de una agencia del gobierno;

- 1           vii.   aprobar o desaprobar cualquier contrato de ejecución futura, gasto o préstamo,  
2                    la creación de cualquier puesto nuevo o que se llene cualquier puesto vacante  
3                    en una entidad del gobierno dentro de la Rama Ejecutiva;
- 4           viii.   revisar y aprobar nóminas u otros cobros reclamados a una entidad del  
5                    gobierno dentro de la Rama Ejecutiva previo al pago;
- 6           ix.    no obstante cualquier requisito de nivel mínimo de personal que pueda ser  
7                    aplicable, establecer e implantar niveles de personal para una entidad  
8                    gubernamental de la Rama Ejecutiva;
- 9           x.    rechazar, modificar o dar por terminado uno o más términos o condiciones de  
10                   un contrato de ejecución futura existente de una entidad gubernamental dentro  
11                   de la Rama Ejecutiva;
- 12          xi.    actuar como, o designar a un agente único de una entidad gubernamental  
13                   dentro de la Rama Ejecutiva para las negociaciones de convenios colectivos  
14                   con empleados o sus representantes y aprobar cualquier contrato o acuerdo en  
15                   nombre de la entidad gubernamental;
- 16          xii.   nombrar, dirigir, supervisar y remover administradores, incluyendo los jefes  
17                   de entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva;
- 18          xiii.   emplear o contratar, en nombre y a expensas de una entidad del gobierno de la  
19                   Rama Ejecutiva, auditores y otro personal técnico;
- 20          xiv.   contratar una o más personas como inspectores generales locales para una o  
21                   más entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva para asegurar la  
22                   integridad, economía, eficiencia y efectividad de las operaciones de las  
23                   entidades gubernamentales haciendo investigaciones significativas y precisas,  
24                   y auditorías forenses, para detectar y prevenir derroches, fraudes y abusos;



- 1 xv. vender, alquilar, traspasar, asignar o de otro modo usar o transferir los activos,  
2 y obligaciones, de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva, si  
3 la venta, alquiler, traspaso, asignación, uso o transferencia no pone en peligro  
4 la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico o afecta  
5 inconstitucionalmente un bono, pagaré, valor u obligación legal no impugnada  
6 de una entidad del gobierno;
- 7 xvi. autorizar que una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva tome  
8 dinero en préstamo;
- 9 xvii. aprobar o desaprobar la emisión de obligaciones de deuda de una entidad  
10 gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva;
- 11 xviii. entrar en un proceso de evaluación neutral con una o más de las partes  
12 interesadas respecto a una obligación de deuda del Territorio o una  
13 instrumentalidad del Territorio, bajo el cual los participantes, mediante un  
14 proceso acordado mutuamente, seleccionen un evaluador neutral para  
15 supervisar el proceso de resolución neutral y facilitar discusiones y  
16 negociaciones de buena fe entre los participantes, en un esfuerzo por resolver  
17 sus disputas relacionadas con la obligación de deuda y bajo el cual el  
18 evaluador neutral pueda hacer recomendaciones para una transacción o plan  
19 de reajuste. Se dispone, sin embargo, que el uso de un proceso de evaluación  
20 neutral conforme a este subpárrafo (a)(xviii) no restringe o de otro modo  
21 prohíbe otras negociaciones o acuerdos con una parte interesada en relación  
22 con una obligación de deuda del Territorio o una instrumentalidad del  
23 Territorio.

- 1           xix.    tomar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento con la Ley  
2                    Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Ley Núm. 147 de 18 de  
3                    junio de 1980, según enmendada, que no sean inconsistentes con las  
4                    disposiciones de esta Ley;
- 5           xx.     requerirle a un oficial, empleado, agente o contratista del Territorio o de una  
6                    instrumentalidad del Territorio que provea a la Junta de Supervisión Fiscal  
7                    copias, sean escritas o en medio electrónico, de los récords, documentos,  
8                    información o datos que la Junta de Supervisión Fiscal pueda requerir;
- 9           xxi.    asegurar el pago y administración de impuestos oportunos y eficientes  
10                   mediante la adopción de tecnologías electrónicas de radicación de informes,  
11                   pagos y auditorías;
- 12           xxii.   prevenir una transferencia de propiedad por parte de una instrumentalidad del  
13                   Territorio prohibida bajo la Sección 407(a) de PROMESA; y
- 14           xxiii.   rescindir una autorización aprobada por la Rama Ejecutiva o la Rama  
15                   Legislativa luego del 4 de mayo de 2016 y antes de la fecha de efectividad de  
16                   esta Ley para la venta pendiente de ejecutarse o transferencia de activos y  
17                   pasivos de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva, si la venta  
18                   o transferencia pone en peligro la salud, seguridad y bienestar de los  
19                   residentes de Puerto Rico o afecta un bono, pagaré, valor u obligación legal  
20                   no impugnada de una entidad del gobierno;

21           **Artículo 207. Controles Administrativos y Financieros**

22           (a)     Durante el Periodo de Emergencia, y sin que se interprete este artículo como una  
23           limitación a los poderes del Gobernador, el Gobernador ejercerá control de supervisión general sobre  
24           las funciones y actividades de todas las entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva.

1 (b) Sin que se interprete este artículo como una limitación a los poderes del Gobernador,  
2 en el ejercicio del control de supervisión general dispuesto en el párrafo (a), el Gobernador y/o la  
3 Autoridad pueden hacer todo, sin limitarse a lo siguiente:

- 4 i. instruir a una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva a reducir  
5 gastos mediante la implantación de eficiencias administrativas;
- 6 ii. imponer límites sobre gastos contractuales de entidades gubernamentales  
7 dentro de la Rama Ejecutiva;
- 8 iii. ordenar la prescripción o el reembolso de asignaciones para múltiples años no  
9 gastadas del fondo general;
- 10 iv. redesignar los fondos especiales no considerados como parte del fondo  
11 general al fondo general;
- 12 v. prohibir el establecimiento de nuevos programas o la expansión de programas  
13 existentes por parte de una entidad gubernamental dentro de la Rama  
14 Ejecutiva;
- 15 vi. emitir directrices para la distribución de asignaciones;
- 16 vii. transferir los fondos asignados de un programa a otro en una misma entidad  
17 gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva; y
- 18 viii. intervenir en cualquier asunto referente a las funciones y actividades bajo el  
19 párrafo (a)

## 20 **Artículo 208. Implantación y Órdenes Ejecutivas**

21 (a) Para propósitos de este Capítulo, cada entidad gubernamental dentro de la Rama  
22 Ejecutiva estará bajo la supervisión del Gobernador salvo que se disponga lo contrario en la  
23 Constitución de Puerto Rico. El Gobernador deberá acordar todos los asuntos de negocio necesarios  
24 con los oficiales de las entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva y puede requerir

1 información por escrito de todos los oficiales ejecutivos y administrativos de las entidades  
2 gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva en relación con el cumplimiento de este Capítulo y  
3 con cualquier asunto relacionado con los deberes de dichos oficiales dentro de sus respectivas  
4 oficinas.

5 (b) El Gobernador puede iniciar procedimientos judiciales en nombre del Territorio para  
6 implantar el cumplimiento de cualquier mandato constitucional o requerimiento de esta Ley, o para  
7 restringir violaciones de cualquier mandato, deber o derecho constitucional, o requerimiento de esta  
8 Ley por parte de cualquier oficial de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva.

9 (c) El Gobernador estará facultado a inquirir sobre la condición y administración de  
10 cualquier oficina pública de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva y sobre los  
11 actos de cualquier oficial público de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva.

12 (d) El Gobernador puede emitir órdenes ejecutivas para implantar y requerir el  
13 cumplimiento con este Capítulo. Una orden ejecutiva emitida al amparo de esta sección es  
14 vinculante para los oficiales, empleados, agentes y contratistas de una entidad gubernamental dentro  
15 de la Rama Ejecutiva. Los oficiales de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva  
16 deberán tomar y dar las directrices para que se tomen las acciones necesarias y recomendables para  
17 cumplir con una orden ejecutiva emitida bajo esta sección aplicable a la entidad gubernamental.

18 (e) El Gobernador puede enmendar, rescindir o reemplazar una orden ejecutiva emitida  
19 bajo esta Ley o la anterior Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto  
20 Rico, las que continuarán en efecto con toda fuerza y vigor hasta que sean enmendadas, rescindidas  
21 o sustituidas.

22 (f) Para implantar el cumplimiento con este Capítulo o con una orden ejecutiva emitida  
23 al amparo de este Capítulo, el Gobernador puede iniciar procedimientos judiciales en nombre del  
24 Territorio.

1           **Artículo 209. Delegación**

2           El Gobernador puede delegar en la Autoridad mediante Orden Ejecutiva cualquier poder o  
3   responsabilidad incluida en esta Ley, en la medida en que tal poder o facultad no haya sido ya  
4   delegada en la Autoridad mediante esta Ley o conforme a la Ley Núm. 2-2017, todo lo cual  
5   continuará en pleno vigor . Una delegación adicional de poder o responsabilidad en la Autoridad no  
6   limita o de otro modo restringe el ejercicio por parte del Gobernador de los poderes y  
7   responsabilidades que se le confieren al Gobernador por esta Ley o de otro modo.

8           **Artículo 210. Contratación de empleados gubernamentales y otros profesionales;**  
9   **Exención de otras leyes**

10           (a)    En cualquier momento durante el Periodo de Emergencia, las siguientes leyes o  
11   disposiciones de las mismas no aplicarán a las contrataciones temporeras o permanentes hechas por  
12   parte del Gobernador, el Departamento de Hacienda, AFI, cualquier subsidiaria del Banco o la  
13   Autoridad, de cualquier individuo que sea empleado del Banco o de cualquier otra entidad  
14   gubernamental para trabajar en la Oficina del Gobernador, el Departamento de Hacienda, AFI, o  
15   cualquier subsidiaria del Banco o la Autoridad respecto a asuntos relacionados con la restructuración  
16   de cualquier obligación de deuda o ajuste de cualquier obligación de deuda, la implantación de  
17   transacciones de manejo de pasivos para las obligaciones de deuda, manejo de asuntos fiscales del  
18   Territorio o cualquier entidad gubernamental, o cualquier asunto que de otra manera se relacione con  
19   las funciones u operaciones hechas o llevadas a cabo por el Banco al amparo de la Ley 17 de 23 de  
20   septiembre de 1948, según enmendada, o de la Ley 272 del 15 de mayo de 1945, según enmendada:

21           i.     Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración  
22                   de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto  
23                   Rico”;

- 1           ii.     Ley Núm. 197-2002, según enmendada, conocida como “Ley del Proceso de la  
2                    Transición del Gobierno”;
- 3           iii.    Ley Núm. 3-2017.
- 4           iv.    Los incisos (b) y (c) del Artículo 4.6 de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada,  
5                    conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”;
- 6           v.     Ley Núm. 103-2006, según enmendada, conocida como “Ley para implantar la  
7                    Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”;
- 8           vi.    Plan 3-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización de la  
9                    Administración de Servicios Generales ; y
- 10          vii.   La Ley Núm. 78-2011, según enmendada, conocida como la “Código Electoral de  
11                    Puerto Rico para el Siglo XXI”.
- 12          (b)    El Gobernador, el Departamento de Hacienda, AFI, o cualquier subsidiaria del Banco  
13            o la Autoridad podrán emplear, contratar, u honrar obligaciones existentes bajo, o asumir, contratos  
14            existentes del Banco o de cualquier entidad gubernamental con consultores y empleados esenciales,  
15            incluyendo asesores legales y financieros, fueran o no los salarios u honorarios incurridos antes de la  
16            fecha en que se hayan asumido, y podrán emplear dichos consultores y empleados esenciales para  
17            asesorar al Gobernador, al Banco o a cualquier entidad gubernamental en asuntos relacionados con  
18            la reestructuración o el ajuste de cualquier obligación de deuda, implantar transacciones de manejo de  
19            pasivos para las obligaciones de deuda o para la administración de los asuntos fiscales del Territorio  
20            y de cualquier entidad gubernamental, o cualquier asunto relacionado con las funciones y  
21            operaciones hechas o llevadas a cabo por el Banco al amparo de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre  
22            de 1948, según enmendada, o de la Ley Núm. 272 de 15 de mayo de 1945, según enmendada. El  
23            Gobernador, el Departamento de Hacienda, AFI, o cualquier subsidiaria del Banco o la Autoridad,  
24            según sea aplicable, deberá someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto un estimado del total de

1 costos y gastos relacionados con los contratos y obligaciones que incurrirá o asumirá de acuerdo con  
2 este artículo para lo que resta del año fiscal 2016-2017. Por la presente se ordena al Secretario de  
3 Hacienda y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a identificar, del presupuesto del año  
4 fiscal 2016-2017, los fondos necesarios para cubrir dichos gastos, o a transferir a AFI, cualquier  
5 subsidiaria del Banco o la Autoridad suficientes fondos para cubrir dichos gastos. Comenzando en el  
6 año fiscal 2017-2018, dichos gastos serán pagados mediante asignaciones hechas por la Asamblea  
7 Legislativa. Las leyes y disposiciones listadas en los incisos (a) i hasta vii de este artículo no  
8 aplicarán a los casos en que se contraten o se asuman obligaciones al amparo de este párrafo.

#### 9 **Artículo 211. Paralización Automática**

10 Mientras la paralización en virtud de PROMESA esté en vigor, cualquier acción que pudiera  
11 ser requerida por PROMESA en un tribunal federal, estatal o de Puerto Rico también es requerida  
12 bajo esta Ley, y cualquier acción similar que surja de, o se relacione con esta Ley es igualmente  
13 requerida mientras la paralización en virtud de PROMESA esté en vigor.

### 14 **CAPÍTULO 3. DEROGACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MORATORIA**

15 **Artículo 301.** Los capítulos 1 y 2 de la Ley Núm. 21-2016, según enmendada, quedan por la  
16 presente derogados.

### 17 **CAPÍTULO 4. ENMIENDA A LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE DESARROLLO** 18 **ECONÓMICO PARA PUERTO RICO**

19 **Artículo 401.** Para añadir un nuevo Artículo 23 a la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985,  
20 según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Banco de Desarrollo Económico, para que lea  
21 como sigue:

22 **“ARTÍCULO 23.- IDIOMA QUE PREVALECE**

1 Si en la interpretación o aplicación de las enmiendas a esta Ley promulgadas por la Ley  
2 Núm. 21-2016 surgiere algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en español, prevalecerá el  
3 texto en inglés”.

4 **Artículo 402.** Se reenumera el Artículo 23 de Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según  
5 emendada, como Artículo 24.

## 6 **CAPÍTULO 5. SEPARABILIDAD Y VIGENCIA**

### 7 **Artículo 501. Separabilidad**

8 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,  
9 subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada  
10 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará  
11 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo,  
12 oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte  
13 de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una  
14 circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección,  
15 subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada  
16 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación  
17 del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la  
18 voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las  
19 disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,  
20 invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o  
21 declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera  
22 aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

### 23 **Artículo 502. Vigencia**

24 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.



## **English version of the Puerto Rico Financial Emergency and Fiscal Responsibility Act.**

### **I. STATEMENT OF INTENT**

The 18th Legislative Assembly has convened as Puerto Rico is in the midst of a continuing and systemic financial and economic crisis. On June 30, 2016, President Barack Obama signed into law the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, Public Law 114-187 (“PROMESA”). PROMESA was enacted pursuant to Section 3 of Article IV of the United States Constitution, which provides Congress the power to dispose of and make all needful rules and regulations for territories. PROMESA established a Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the “Oversight Board”) to provide a method for the Government of Puerto Rico and its instrumentalities to achieve fiscal responsibility and access to capital markets. On October 30, 2016, the Oversight Board designated Puerto Rico, the Employees Retirement System, the Judiciary Retirement System, the Teachers Retirement System, the University of Puerto Rico and twenty-one public corporations of Puerto Rico as “covered entities” subject to oversight under PROMESA. Section 405(b) of PROMESA also imposes a temporary stay of litigation and claims against Puerto Rico and its instrumentalities for various matters (as the same may be extended under PROMESA, the “Enactment Stay”), with the hope that the Government of Puerto Rico, on its own behalf and on behalf of its instrumentalities, will enter into voluntary negotiations with its creditors to reorganize and settle the repayment of its debt obligations, while simultaneously embarking on a responsible restructuring of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities that realigns the essential services required for the health, safety, and welfare of the residents of Puerto Rico with the timely repayment of its debt obligations. Pursuant to PROMESA, ongoing fiscal planning, budgeting, legislative, and executive action of Puerto Rico, as well as consensual and non-consensual debt restructurings and the issuance, guarantee, exchange, modification, repurchase, or redemption of debt, is subject to oversight.

This act, to be known as the Puerto Rico Financial Emergency and Fiscal Responsibility Act ( the “Act”), is intended to facilitate and encourage a voluntary negotiation process under PROMESA between the Governor and/or the Puerto Rico Fiscal Agent and Financial Advisory Authority, on behalf of the Government of Puerto Rico, and the creditors of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities. This Act authorizes the Government of Puerto Rico, within the parameters established by PROMESA, to designate certain services necessary for the health, safety and welfare of the residents of Puerto Rico and provided by the Government of Puerto Rico and its instrumentalities as “essential services,” in accordance with the Constitution of Puerto Rico.

In passing this Act, this Legislative Assembly is removing several significant and contentious obstacles to voluntary negotiations with the Government’s creditors. Specifically, this Act amends and repeals portions of the Puerto Rico Emergency Moratorium and Financial Rehabilitation Act, Act No. 21-2016, as amended by Act No. 40-2016 and Act No. 68-2016 (the “Moratorium Act”). The Moratorium Act, and executive orders issued by the Governor under the Moratorium Act (the “Executive Orders”), permitted the Government to withhold the timely payment of its obligations at a point in time before the enactment of PROMESA. The enactment of PROMESA has, however, established processes and timelines for the resolution of the Government’s financial emergency that preempt and supersede provisions of the Moratorium Act. Through PROMESA and the establishment of the Oversight Board, Puerto Rico has been given tools to establish fiscal discipline, restructure its debt, and restore opportunity to the Territory.

The enactment of the Moratorium Act and the issuance of certain of the Executive Orders also has resulted in significant litigation initiated by creditors of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities. This litigation is costly and both consumes resources needed to provide for the health, safety and welfare of the residents of Puerto Rico, and the economic development of the Territory, and impedes voluntary negotiations with creditors. With the establishment of the Oversight Board, and requirements in PROMESA for the Oversight Board to prepare a fiscal plan in accordance with PROMESA, it is critical that this Legislative Assembly and the Government of Puerto Rico quickly turn their attention to working with the Oversight Board to ensure a voluntary negotiation and settlement process (rather than one imposed on the Territory) for the Government of Puerto Rico and its creditors. Without first affording an opportunity for the Government of Puerto Rico to engage in meaningful attempts to reach its own consensual resolution with its creditors, necessary for the health, safety and welfare of the residents of Puerto Rico PROMESA mandates that the Oversight Board impose a resolution on the Territory.

Section 204(c)(3) of PROMESA also grants the Oversight Board authority to rescind any laws enacted between May 4, 2016 and September 30, 2016 (the latter date being the date when the Oversight Board and Oversight Board Chair assumed office), that either permit the transfer of any funds or assets outside the ordinary course of business or that are inconsistent with Constitution of Puerto Rico or the laws of Puerto Rico (the “Rescission Period”). This Legislative Assembly and Puerto Rico’s new Governor, acting in good faith and with the intent to facilitate Government-led negotiations with the creditors of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities, contend that it is in Puerto Rico’s best interests to rescind laws inconsistent with PROMESA that impede a voluntary negotiation process with creditors of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities. As a result, this Act does the following: (i) repeals significant portions of the Moratorium Act; (ii) suspends or cancels, or both, all special appropriations not budgeted in the current fiscal year that may have been multi-year authorizations from prior fiscal years; and (iii) authorizes the re-designation of the special funds not considered part of the general fund as part of the general fund.

According to data provided by the Treasury Department, Puerto Rico suffers an economic contraction with a 14.6% decline in its Gross State Product (real GSP), and an additional 3% contraction is forecasted for the next two years. For years, the Government has been operating with a structural deficit that has been financed with bond issues and loans from the Government Development Bank. For more than one year, the Government has lacked liquidity and has been using tax refunds, payments to suppliers, government pension moneys, and intra-government loans as substitute for liquidity sources.

Access to the financial information of the Government, as well as the preparation of adequate forecasts, have been affected by a fragmented government structure and obsolete government systems. Revenues are consistently overestimated and are continuously decreasing despite the fact that multiple new taxes were levied. As of May 1, 2016, the Government Development Bank defaulted on its bonds and is no longer fulfilling its role of liquidity provider. Puerto Rico’s obligations portfolio totals \$66 billion and includes 18 different issuers, which are in a precarious financial situation. Debt service averages \$3.5 billion and consumes more than one fourth of the revenue sources. The retirement systems are practically insolvent with a \$50 billion dollar deficit.

The foregoing is exacerbated by the population decrease caused by a migration wave that began in 2006 and has become one of the challenges to steering Puerto Rico towards recovery.

In view of this dismal picture, it is time to roll up our sleeves and work very hard for the wellbeing of Puerto Rico. It is our job to build a new Puerto Rico by implementing a public policy and administration that no longer improvises or manages finances from one year to the next, but rather starts addressing the long-term revenue/expenditure imbalance. Our commitment, as stated in our Plan for Puerto Rico, is to address these situations in a responsible manner and restore the credibility of our Island. We have to look into the future and anticipate these challenges instead of simply surviving from one crisis to the next. The leaders and officers of the government components of Puerto Rico must focus on balancing revenue and expenditure, reducing the level of government intervention in the economy of Puerto Rico and creating a competitive environment for business, where good faith prevails and local and foreign investors as well as business owners can lead the way toward economic recovery. The politics of the past led the United States Congress to enact PROMESA, delegating in a Financial Oversight Board the power to work with the Government of Puerto Rico to get us out of the crisis we are facing. In this respect, on December 20, 2016, the Oversight Board requested as a priority to bring forth a plan and commitment to implement major changes addressed at:

- Restoring economic growth and create a more competitive economy. In the short-term, these changes should include liberalizing the labor market and social assistance programs, lowering the cost of energy, rationalizing and optimizing taxation and streamlining the permitting processes to enable investment.
- Restructuring the Government to achieve balanced budgets while preserving essential services for the people of Puerto Rico.
- Restructuring pension systems pursuant to PROMESA and re-establishing access to the capital markets.

For these reasons, it is essential to bring about unprecedented changes that will make the government more efficient and fiscally responsible. As a matter of fact, the Plan for Puerto Rico, which the People of Puerto Rico endorsed on November 8, 2016, includes measures to achieve fiscal responsibility and grow the economy of the Island.

## II. Background.

### A. Passage of Moratorium Act

On April 6, 2016, then-Governor Alejandro García Padilla (“Governor García Padilla”) signed into law the Moratorium Act. When adopting the Moratorium Act, the 17<sup>th</sup> Legislative Assembly made certain findings, as reflected in section 108 of the Moratorium Act, that the Government should prioritize the payment of essential services over debt service. The Moratorium Act was enacted at a point in time when federal congressional action to address Puerto Rico’s financial crisis had not yet been completed.

The Moratorium Act had four primary objectives. The first, contained in Chapter 2 of the Moratorium Act, authorized the Governor to (i) declare a moratorium on debt service payments for a

temporary period for the Government of Puerto Rico, the Government Development Bank of Puerto Rico (“GDB”), the Economic Development Bank of Puerto Rico (“EDB”), or any of the other instrumentalities of the Government of Puerto Rico, and (ii) stay creditor remedies that might result from the moratorium. The second objective, contained in Chapters 3 and 4 of the Moratorium Act, amended GDB’s Enabling Act to give GDB options and tools to address its own financial difficulties. These amendments (a) modernized GDB’s Organic Act related to receivership of GDB and (b) authorized the creation of a temporary “bridge” bank to carry on certain of GDB’s functions and to honor deposits. The third objective, contained in Chapter 5 of the Moratorium Act, amended the EDB’s Enabling Act to modernize its receivership provisions. The fourth objective, contained in Chapter 6 of the Moratorium Act, created the Puerto Rico Fiscal and Financial Advisory Authority. The new Administration enacted a the law to repealed Chapter 6 of Act No. 21-2016, and created a new Authority, with broad powers, known as the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority, Act No. 2-2017.

#### B. State of Emergency Declared for Commonwealth and Certain Governmental Entities

Following enactment of the Moratorium Act, Governor García Padilla issued various executive orders pursuant to authority granted under the Moratorium Act. As part of the Executive Orders, Governor Padilla declared a state of emergency for the Commonwealth (EO 2016-30); GDB (EO 2016-10); the Puerto Rico Infrastructure Finance Authority (“PRIFA”) (EO 2016-14); the Highway and Transportation Authority (“HTA”) (EO 2016-17); the Puerto Rico Public Building Authority (“PBA”) (EO 2016-30); the Puerto Rico Metropolitan Bus Authority (“AMA”) (EO 2016-30); the Puerto Rico Convention Center District Authority (“CCDA”) (EO 2016-31); the Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of PR and its Instrumentalities (“ERS”) (EO 2016-31); the Puerto Rico Industrial Development Company (“PRIDCO”) (EO 2016-31); the University of Puerto Rico (“UPR”) (EO 2016-31); and the Puerto Rico Public Finance Corporation (“PFC”) (EO 2016-31). Executive Orders (EO-2016-17 and EO 2016-29) exclude the Puerto Rico Electric Power Authority (“PREPA”) from the Moratorium Act’s coverage.

The repeal of portions of the Moratorium Act, including those providing for emergency periods and a stay of litigation, should not expose the Government to more litigation from creditors. Section 405 of PROMESA affords a temporary stay of litigation to facilitate voluntary negotiations between the Government and its creditors. By repealing the emergency periods and litigation stay under the Moratorium Act, this Legislative Assembly and Governor are signaling their desire to engage in voluntary negotiations with the creditors of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities instead of spending more resources and time litigating procedural motions that are unproductive to facilitating a fair settlement and restructuring and to addressing the dire need for economic growth and for the effective and efficient services for the people of the Territor

## 1 **CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS**

### 2 **Section 101. Short Title**

3 This law shall be known and may be cited as the “Puerto Rico Financial Emergency and  
4 Fiscal Responsibility Act of 2017”.

### 5 **Section 102. Declaration of Financial Emergency**

1           It is hereby found and declared that the grave public financial emergency identified and  
2 declared to exist by the Legislative Assembly on numerous prior occasions continues and has  
3 worsened; that this ongoing financial emergency and the resulting impact upon the solvency of the  
4 Government of Puerto Rico and its instrumentalities continues to materially and adversely affect the  
5 ability to meet financial obligations and to provide for the health, safety, and welfare of the residents  
6 of Puerto Rico; and that resolution of the financial emergency and establishing fiscal responsibility  
7 within the Government of Puerto Rico and its instrumentalities is vitally necessary to assure the  
8 provision of those governmental services essential to the public health, safety, and welfare of the  
9 residents of Puerto Rico.

10           The continuing financial emergency has been recognized by the government of the United  
11 States through the enactment of the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability  
12 Act, Public Law 114-187 (“PROMESA”), which, among other things, provides measures to assist  
13 the Government of Puerto Rico and its instrumentalities in achieving fiscal responsibility and access  
14 to capital markets.

15           When enacting PROMESA, the United States Congress found that a combination of severe  
16 economic decline, and, at times, accumulated operating deficits, lack of financial transparency,  
17 management inefficiencies, and excessive borrowing has created a fiscal emergency in Puerto Rico  
18 and that as a result of its fiscal emergency, the Government of Puerto Rico has been unable to  
19 guarantee its ongoing operations and provide the residents of Puerto Rico with effective essential  
20 services.

21           There exist certain broad rights, powers, and obligations of Puerto Rico, founded in or  
22 imposed by the United States Constitution and the Constitution of Puerto Rico, statutory law, and  
23 equity that arise as a result of such an emergency; and certain additional rights, powers, and  
24 obligations granted to or imposed by PROMESA and the exercise by the United States Congress of

1 its territorial clause powers. In light of the continuing financial emergency and the enactment of  
2 PROMESA, the Legislative Assembly has a responsibility to exercise its police powers in a manner  
3 that recognizes the responsibility to satisfy financial obligations of the Government of Puerto Rico  
4 and its instrumentalities, while continuing to provide governmental services essential to the health,  
5 safety, and welfare of the residents of Puerto Rico given the limited available resources of the  
6 Government of Puerto Rico and its instrumentalities, all in a manner consistent with PROMESA. In  
7 exercising its police powers, the Legislative Assembly also recognizes the need to remedy the  
8 financial emergency by providing for prudent fiscal management, efficient administration, and  
9 provision of essential services, while permitting negotiation with creditors and the restructuring of  
10 contractual obligations.

11 The Legislative Assembly also declares that the Governor of Puerto Rico must also be fully  
12 empowered to exercise the Governor's duty to provide for the health, safety, and welfare of the  
13 residents of Puerto Rico by granting the Governor emergency police powers under this Act,  
14 including, but not limited to, powers relating to the identification of those governmental services  
15 essential to the health, safety, and welfare of Puerto Rico; assuring efficient and effective  
16 administration of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities; and supervising and  
17 directing the fiscal affairs of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities.

### 18 **Section 103. Definitions**

19 The following words and terms, when used in this Act, shall have the meaning stated below:

- 20 (a) "Act" shall mean this Puerto Rico Financial Emergency and Fiscal Responsibility Act  
21 of 2017.
- 22 (b) "Authority" shall mean the Fiscal Agency and Financial Advisory Authority.
- 23 (c) "AFICA" shall mean the Puerto Rico Industrial, Tourist, Educational, Medical and  
24 Environmental Control Facilities Financing Authority.

- 1 (d) “Agreement with Creditors” shall mean an agreement executed among a government  
2 entity and certain creditors of such government entity, including, but not limited to, a  
3 consensual restructuring support agreement relating to the restructuring of its debt, as  
4 it may be amended, supplemented or reinstated from time to time, regardless of  
5 whether or not it is securitized.
- 6 (e) “AMA” shall mean the Metropolitan Bus Authority.
- 7 (f) “Available resources” shall have the meaning given to such term for purposes of  
8 Section 8 of Article VI of the Constitution of Puerto Rico.
- 9 (g) “Bank” shall mean either or both of—
- 10 i. the Government Development Bank for Puerto Rico; and
- 11 ii. the Economic Development Bank for Puerto Rico.
- 12 (h) “Board” shall mean the Board of Directors of each Bank.
- 13 (i) “Bond claim” for purposes of Section 206, shall mean that term as defined under  
14 Section 5 of PROMESA
- 15 (j) “CCDA” shall mean the Puerto Rico Convention Center District Authority.
- 16 (k) “Children’s Trust” shall mean the not-for-profit entity created by the Territory  
17 pursuant to the Children’s Trust Law, Act No. 173-1999, as amended.
- 18 (l) “COFINA” shall mean the Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation.
- 19 (m) “Debt instrument” shall include any document or instrument for, used in connection  
20 with, or related to:
- 21 i. any obligation to pay the principal of, premium of, if any, interest on,  
22 penalties, reimbursement or indemnification amounts, fees, expenses, or other  
23 amounts relating to any indebtedness, and any other liability, contingent or  
24 otherwise,

- 1 a. for borrowed money,
- 2 b. evidenced by bonds, debentures, indentures, notes, resolutions, credit
- 3 agreements, trade finance agreements, trade finance facility
- 4 agreements, securities, or similar instruments, or
- 5 c. for any letter of credit or performance bond;
- 6 ii. any contingent obligation in respect of or related to any liability of the kind
- 7 described in the preceding clause (i), including, but not limited to, any
- 8 guaranty of such liability and any reimbursement agreement in respect of an
- 9 insurance policy covering such liability;
- 10 iii. any obligation in respect of bankers' acceptances;
- 11 iv. any obligation in respect of a swap agreement, derivative contract or related
- 12 agreement, hedge agreement, securities contract, forward contract, repurchase
- 13 agreement, option, warrant, commodities contract, or similar document;
- 14 v. any and all deferrals, renewals, extensions, and refunding of, or amendments,
- 15 modifications, or supplements to, any liability of the kind described in any of
- 16 the preceding clauses (i) through (iv);
- 17 vi. any liability arising out of any judgment relating to any liability of the kind
- 18 described in any of the preceding clauses (i) through (v); or
- 19 vii. any liability arising from an obligation of insurance relating to any liability of
- 20 a kind described in this section.

21 Provided that "debt instrument" shall not include any contract for the provision of

22 goods or services, nor shall it include any clearing services agreement or other

23 agreement pursuant to which a financial institution provides services to the Bank or

24 any other government entity.



- 1 (n) "Deposit" shall mean funds held by the Bank that are classified by such Bank as  
2 deposits.
- 3 (o) "Depositor" shall mean any person, or authorized representative thereof, who is the  
4 primary or beneficial owner of any account containing deposits held by the Bank.
- 5 (p) "Depository Institution" shall mean, for purpose of this Act, banks and cooperative  
6 savings and credit associations (state chartered credit unions) operating in Puerto  
7 Rico, and the Public Corporation for the Supervision and Insurance of Cooperatives  
8 of Puerto Rico, as insurer of the share and deposits of cooperative savings and credit  
9 associations (state chartered credit unions).
- 10 (q) "Emergency Period" shall mean the period beginning on the effective date of this Act  
11 and ending upon May 1, 2017, which term may be extended by the Governor  
12 pursuant to an executive order for three (3) additional months.
- 13 (r) "ERS" shall mean the Employees Retirement System of the Government of the  
14 Territory and its Instrumentalities.
- 15 (s) "Essential service" shall mean a service provided by the Territory or an  
16 instrumentality of the Territory identified by the Governor in Chapter 2 of this Act as  
17 a service essential to the public health, safety, and welfare of the residents of Puerto  
18 Rico.
- 19 (t) "Good faith" for purposes of Section 206, shall mean participation by an interested  
20 party in a neutral evaluation process with the intent to negotiate a resolution of the  
21 issues that are the subject of the neutral evaluation process, including the timely  
22 provision of complete and accurate information to provide the relevant participants  
23 through the neutral evaluation process with sufficient information, in a confidential  
24 manner, to negotiate the readjustment of a debt obligation.

- 1 (u) "Government entity" shall mean the Territory, AFICA, AMA, each Bank and any  
2 subsidiary thereof, CCDA, COFINA, ERS, HFA, HTA, PBA, PFC, PRASA, PREPA,  
3 PRIDCO, PRIFA, PRPA, UPR, and any other public entity or instrumentality of the  
4 Territory designated by the Oversight Board as a covered entity and subject to  
5 oversight by the Oversight Board.
- 6 (v) "Governor" shall mean the Governor of the Territory under Article IV of the  
7 Constitution of Puerto Rico.
- 8 (w) "HFA" shall mean the Puerto Rico Housing Finance Authority.
- 9 (x) "HTA" shall mean the Puerto Rico Highways and Transportation Authority.
- 10 (y) "Interest obligation" shall mean any obligation arising under or related to the  
11 payment of interest on any debt instrument.
- 12 (z) "Interested party" for purposes of Section 206, shall mean a trustee, a committee of  
13 creditors, an affected creditor, an indenture trustee, a bondholder or an insurer of a  
14 debt obligation or a committee of insurers of debt obligations.
- 15 (aa) "MFA" shall mean the Puerto Rico Municipal Finance Agency
- 16 (bb) "Neutral evaluation process" for purposes of Section 206, shall mean a form of  
17 alternative dispute resolution or mediation between the Territory or an instrumentality  
18 of the Territory conducted in a manner that promotes voluntary, un-coerced decision-  
19 making in which each participant makes free and informed choices in good faith  
20 regarding process and outcome and in which a neutral evaluator uses his or her best  
21 efforts to assist the participants in reaching a satisfactory resolution of their disputes  
22 relating to debt obligations.
- 23 (cc) "Neutral evaluator" for purposes of Section 206, shall mean an impartial, unbiased  
24 person commonly known as a mediator, who assists the Territory or an

1 instrumentality of the Territory and interested parties in reaching their own settlement  
2 of issues relating to debt obligations of the Territory or an instrumentality of the  
3 Territory.

4 (dd) "Oversight Board" shall mean the Financial Oversight and Management Board  
5 established for Puerto Rico under PROMESA.

6 (ee) "PBA" shall mean the Puerto Rico Public Buildings Authority.

7 (ff) "Person" shall mean any natural person or legal entity, including, but not limited to,  
8 any government agency, department, instrumentality, public corporation,  
9 municipality, board, office, committee or dependency or any public or private  
10 individual, firm, partnership, stock company, limited liability company, association or  
11 corporation organized and existing under the laws of the Territory, the United States  
12 of America or any of its states, or of any foreign country, or any combination of the  
13 above.

14 (gg) "PFC" shall mean the Puerto Rico Public Finance Corporation.

15 (hh) "PRASA" shall mean the Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority.

16 (ii) "PREPA" shall mean the Puerto Rico Electric Power Authority.

17 (jj) "PRIDCO" shall mean Puerto Rico Industrial Development Company.

18 (kk) "PRIFA" shall mean the Puerto Rico Infrastructure Financing Authority.

19 (ll) "Principal obligation" shall mean any obligation arising under or related to the  
20 payment of principal of any debt instrument, as may be adjusted to account for  
21 accretion in the case of capital appreciation bonds or convertible capital appreciation  
22 bonds prior to conversion, or for unamortized original issue discount or premium.

23 (mm) "PRPA" shall mean the Puerto Rico Ports Authority.

1 (nn) “PROMESA” shall mean the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic  
2 Stability Act, Public Law 114-187.

3 (oo) “Public debt” shall mean any obligation or evidence of indebtedness of the Territory,  
4 or a government entity, with the meaning of in Section 2 of Article VI of the  
5 Constitution of Puerto Rico.

6 (pp) “Territory” shall mean the Commonwealth of Puerto Rico as constituted under  
7 Section 1 of Article I of the Constitution of Puerto Rico.

8 (qq) “UPR” shall mean the University of Puerto Rico.

9 **Section 104. Public Policy**

10 It is the public policy of the Government of Puerto Rico to take all the required measures for  
11 Puerto Rico to establish fiscal responsibility within the Government and its instrumentalities  
12 necessary to satisfy its obligations and to assure the provision of those governmental services  
13 essential to the public health, safety, and welfare of the residents of Puerto Rico. Also, to exercise its  
14 police powers in a manner that recognizes the responsibility to satisfy financial obligations of the  
15 Government of Puerto Rico and its instrumentalities, while continuing to provide governmental  
16 services essential to the health, safety, and welfare of the residents of Puerto Rico given the limited  
17 available resources of the Government of Puerto Rico and its instrumentalities.

18 **Section 105. Relation to Constitutional Provisions; Supremacy Over Other Laws**

19 This Act has been enacted pursuant to and in accordance with the Constitution of Puerto  
20 Rico and in furtherance of the police powers of the Territory and as otherwise detailed in this Act. In  
21 the event that the provisions of this Act are in conflict with the provisions of any other law, the  
22 provisions of this Act shall prevail. Implementation of this Act is subject to the requirements of the  
23 Constitution of Puerto Rico and PROMESA.

1           Notwithstanding anything herein to the contrary, if a power or duty is delegated to the  
2 Authority under the Puerto Rico Fiscal and Financial Advisory Authority Act, Act No. 2-2017, this  
3 Act should not be interpreted to affect, alter, rescind or in any way modify that delegation. Further, a  
4 delegation of a power or duty under Puerto Rico Fiscal and Financial Advisory Authority Act, Act  
5 No. 2-2017, does not limit or otherwise restrict the exercise by the Governor of powers or duties  
6 vested in the Governor by this Act or otherwise.

7           **Section 106. Immunities**

8           (a)     Except to the extent proven by final and unappealable judgment to have engaged in  
9 willful misconduct for personal gain or gross negligence comprising reckless disregard of applicable  
10 duties, no person shall have any liability, civil, criminal, or otherwise, for, and without further notice  
11 or order shall be exonerated from, actions taken or not taken in their capacity, and within their  
12 authority in connection with, related to, or arising under, or as permitted under this Act, nor for any  
13 transfer, sale or assignment of assets or withdrawal of funds approved or executed by any  
14 government entity prior to or after the enactment of this Act if any such transfer, sale, assignment or  
15 withdrawal of deposits or other funds, as applicable, is found by a court to be in violation of this Act,  
16 Act No. 17 of September 23, 1948, as amended, Act No. 22 of July 24, 1985, as amended, sections  
17 1243, 1244, and 1249 of the Civil Code of Puerto Rico, or any other similar or analogous law or  
18 provision.

19           (b)     No financial institution or agent thereof providing clearing services or other financial  
20 services to the Bank or any other government entity pursuant to any agreement with the Bank or  
21 such government entity shall have any liability, civil, criminal, or otherwise, for, and without further  
22 notice or order shall be exonerated from, actions taken or not taken in connection with such  
23 agreement, nor for any transfer or withdrawal of deposits or other funds made pursuant thereto if any  
24 such transfer or withdrawal is found by a court to be in violation of this Act, Act No. 17 of

1 September 23, 1948, as amended, Act No. 22 of June 24, 1985, as amended, or Sections 1243, 1244  
2 and 1249 of the Civil Code of Puerto Rico, any regulation or executive order issued hereunder or  
3 thereunder, or any other similar or analogous law or provision.

4 (c) Any financial institution in which a check issued by any government entity is  
5 deposited or which receives any other instruction from a government entity to transfer funds shall be  
6 entitled to honor such check or instruction in the ordinary course of its banking operations without  
7 inquiring whether the requirements of this Act or any executive order issued hereunder have been  
8 complied with. The Bank and the government entities shall be solely responsible and liable for  
9 compliance with any provision of this Act or any regulation or executive order issued hereunder that  
10 restricts the use of government funds or the issuance of checks or other instructions relating to  
11 government funds held by financial institutions.

12 (d) Any action brought for gross negligence shall be dismissed with prejudice if: (i) a  
13 defendant, as an official, officer, director, committee member, or professional produces documents  
14 showing in respect of whatever acts or omissions form the basis of the complaint, such defendant  
15 received or relied on the advice of experts or was advised of relevant facts, participated in person or  
16 by phone, and deliberated in good faith; or (ii) the acts or omissions that form the basis of the  
17 complaint, indictment, or information do not clearly violate an established duty of which a  
18 reasonable person would have clear notice under the particular circumstances.

### 19 **Section 107. Language Conflict**

20 This Act shall be adopted both in English and Spanish. If in the interpretation or application  
21 of this Act any conflict arises as between the English and Spanish texts, the English text shall  
22 govern.

## 23 **CHAPTER 2. FINANCIAL EMERGENCY POWERS**

### 24 **Section 201. Finding on Financial Emergency Powers**

1           It is the Legislative Assembly’s finding that given the Territory’s continuing financial  
2 emergency, that during the Emergency Period, the Governor should be authorized to exercise the  
3 powers vested in the Governor under this section to designate services provided by the Territory and  
4 its instrumentalities as essential services or services that are not essential services and utilize  
5 available resources to provide for the satisfaction of obligations of the Territory and its  
6 instrumentalities while also recognizing the need to provide for the services essential to the health,  
7 safety, and welfare of the residents of Puerto Rico.

8           **Section 202. Maintaining Essential Services**

9           During the Emergency Period, the Governor may issue executive orders designating the  
10 priority for use of available resources to pay for the essential services the Governor deems necessary  
11 to provide for health, safety, and welfare of the residents of Puerto Rico, while also recognizing the  
12 debt obligations of the Territory and its instrumentalities.

13           **Section 203. Payment for Essential Services and Payment Priorities**

14           (a)     The Legislative Assembly finds that it is inappropriate to categorically prioritize the  
15 payment of non-debt expenditures over debt service. Rather, during the Emergency Period, the  
16 Governor shall pay debt service to the extent (a) possible after all essential services of the  
17 Commonwealth of Puerto Rico have been provided for; or (b) ordered to do so by the Oversight  
18 Board or any other board created under federal law. In the event that the provisions of this Act are in  
19 conflict with the provisions of any other law, the provisions of this Act shall prevail.

20           (b)     During the Emergency Period, the Governor may issue executive orders requiring the  
21 use of available resources to be deposited in a lockbox account under the sole control of the  
22 Authority pay for essential services as the Governor deems necessary to protect the health, safety,  
23 and welfare of the residents of Puerto Rico. The Governor may take any and all actions that the

1 Governor deems reasonable and necessary to preserve the ability of the Territory or an  
2 instrumentality of the Territory to continue providing essential services to residents of Puerto Rico.

3 (c) During the Emergency Period, the Governor may issue executive orders establishing  
4 priority rules for the disbursement of public funds when resources available for a fiscal year are  
5 insufficient to cover the appropriations made for that fiscal year.

6 (d) During the Emergency Period, notwithstanding Section 4(c) of Act No. 147 of June  
7 18, 1980, as amended, the Governor may reprioritize services and expenses described in Section  
8 4(c)(3) to a higher payment priority than as listed in Section 4(c).

9 (e) During the Emergency Period, the Governor may issue executive orders as the  
10 Governor deems necessary or advisable to assure the payment of a debt obligation of the Territory or  
11 an instrumentality of the territory.

#### 12 **Section 204. Emergency Bank Measures**

13 (a) During the Emergency Period, the Governor may take any and all actions that the  
14 Governor deems reasonable and necessary to permit the Bank to continue carrying out its operations.

15 (b) For the purposes of this section, actions that are “reasonable and necessary” include,  
16 without limitation, all of the following—

17 i. prescribing such conditions or restrictions for the conduct of the business of  
18 the Bank, including dispensing with the compliance, in whole or in part, of  
19 any requirement prescribed by otherwise applicable law, including those that  
20 require the Bank to maintain deposit reserves above a certain threshold;

21 ii. ordering the limitation, postponement or suspension of any payment, in whole  
22 or in part, of any obligation pursuant to terms the Governor prescribes to  
23 address the Bank’s liquidity needs or facilitate the Bank’s ability to carry out  
24 its operations;



- 1           iii.    suspending—
  - 2               A.     payments on any obligation guaranteed by the Bank;
  - 3               B.     payments on any letter of credit; and
  - 4               C.     any obligation or commitment to lend or extend money or credit;
- 5           iv.    taking any action with respect to the Bank as provided for in Act No. 17 of  
6               September 23, 1948, as amended or Act No. 22 of July 24, 1985, as amended,  
7               as applicable; and
- 8           v.    delegating to the Bank, its Board, or its employees authority to take actions in  
9               furtherance of this Section.

10           (c)    If any restriction is placed on disbursements by the Bank pursuant to subsection (a) of  
11 this Section,—

- 12           i.    the Bank shall not disburse any loans or credit facility unless authorized by  
13               the Governor;
- 14           ii.   the Bank shall honor requests to withdraw or transfer any deposit, including  
15               by check or other means, of an agency, public corporation, municipality or  
16               instrumentality of the Territory (other than those listed in subsection (c)(iii) of  
17               this subsection) as may be authorized by the Governor, from time to time;
- 18           iii.   subject to the availability of funds and the aggregate disbursements  
19               established by the Governor, the Bank shall honor any request to withdraw or  
20               transfer any deposit held by, or request to honor any check written by, the  
21               Legislative Branch, the Judicial Branch, UPR, the Office of the Comptroller,  
22               the Office of the Electoral Comptroller, the State Elections Commission, the  
23               Government Ethics Office, the Independent Prosecutors Panel, or a  
24               municipality of the Territory; provided, however, that an authorized officer of

1           an entity listed in this paragraph certifies along with supporting  
2           documentation that such funds will be used for the payment of essential  
3           services.

4           (d)    Except as provided in subsection (e) of this section, if any restriction is placed on  
5    disbursements from the Bank pursuant to this section, then any value disbursed to a creditor after  
6    such restriction is imposed shall be subtracted from the value of any distribution that such creditor is  
7    entitled to receive, as of the first date of the restriction, if the Bank is subsequently liquidated or  
8    placed into a receivership.

9           (e)    Disbursements made by the Bank before or during the Emergency Period that are  
10   made in the ordinary course, including disbursements to cover expenses of the nature described in  
11   Article 12 Section (A)(2) or (3) of Act No. 17 of September 23, 1948, as amended, or to pay for  
12   goods and services provided to the Bank, shall, for the avoidance of doubt, in each case, be exempt  
13   from Article 17 of Act No. 17 of September 23, 1948, as amended.

14          (f) A check written in violation of this Act or an executive order issued pursuant to this Act is  
15   null and void, and any person that intentionally writes a check to withdraw all or a substantial  
16   portion of their deposited fund balance in violation of this section is guilty of a felony punishable by  
17   imprisonment for up to one (1) year or by a fine of not less than twenty-five thousand dollars  
18   (\$25,000), or both.

19           **Section 205. Issuance by Government Entity of Evidence of Debt**

20          Nothing in this Act prohibits or prevents any government entity, whether during the  
21   Emergency Period or not, from issuing evidence of debt to consenting holders of any debt  
22   obligation, any debt instrument or other evidence of debt, in payment, renewal, or refunding of or in  
23   exchange for such consenting holder's debt obligation, on terms that otherwise comply with this Act

1 and any other applicable law, including, but not limited to, PROMESA. Providing such evidence  
2 may not, and shall not, constitute the issuance of new debt under the Act.

3 **Section 206. Additional Emergency Powers of Governor**

4 (a) During the Emergency Period the Governor is hereby granted broad receivership  
5 powers to rectify the financial emergency declared by this Act, take action necessary to satisfy the  
6 debt obligations of the Territory and its instrumentalities and to act to ensure the provision of  
7 essential services, consistent with the Constitution of Puerto Rico, the Governor's inherent police  
8 powers, and PROMESA. The Governor, together with the Authority, may take the following  
9 actions as the Governor and the Authority deem necessary or advisable to rectify the financial  
10 emergency, including but not limited to:

- 11 i. analyze factors and circumstances contributing to the financial emergency and  
12 initiate steps to correct the factors and circumstances;
- 13 ii. limit the expenditure of appropriated funds;
- 14 iii. issue executive orders or other directives regarding the disbursement or  
15 disposition of funds held by the Bank or other government entity;
- 16 iv. require and approve or disapprove, or amend or revise, a plan for paying debt  
17 obligations of the Territory or its instrumentalities;
- 18 v. require and prescribe the form of special reports to be made by Territory or an  
19 instrumentality of the Territory to creditors or the Oversight Board;
- 20 vi. examine all records and books of account of a government entity and require  
21 attendance of witnesses and the production of books, papers, contracts, and  
22 other documents relevant to an analysis of the financial condition a  
23 government agency;

- 1           vii.    approve or disapprove any executory contract, expenditure, or loan, the  
2                    creation of any new position, or the filling of any vacancy in a position by any  
3                    government entity within the Executive Branch;
- 4           viii.   review and approve payrolls or other claims against a government entity  
5                    within the Executive Branch before payment;
- 6           ix.     notwithstanding any otherwise applicable minimum staffing level  
7                    requirement, establish and implement staffing levels for a government entity  
8                    within the Executive Branch;
- 9           x.     reject, modify, or terminate one or more terms and conditions of an existing  
10                    executory contract of a government entity within the Executive Branch;
- 11          xi.     act as or designate a sole agent of a government entity within the Executive  
12                    Branch in collective bargaining with employees or representatives and  
13                    approve any contract or agreement on behalf of the government entity;
- 14          xii.    appoint, direct, supervise, and remove administrators, including heads of  
15                    government entities within the Executive Branch;
- 16          xiii.   employ or contract for, at the expense of a government entity within the  
17                    Executive Branch, auditors and other technical personnel;
- 18          xiv.    retain one or more persons as a local inspector general for one or more  
19                    government entities within the Executive Branch to assure integrity, economy,  
20                    efficiency, and effectiveness in the operations of the government entities by  
21                    conducting meaningful and accurate investigations and forensic audits, and to  
22                    detect and deter waste, fraud, and abuse;
- 23          xv.    sell, lease, convey, assign, or otherwise use or transfer the assets, and  
24                    liabilities, of a government entity within the Executive Branch, if the sale,

1 lease, conveyance, assignment, use, or transfer does not endanger the health,  
2 safety, or welfare of the residents of Puerto Rico or unconstitutionally impair  
3 a bond, note, security, or uncontested legal obligation of the government  
4 entity;

5 xvi. authorize the borrowing of money by a government entity within the  
6 Executive Branch;

7 xvii. approve or disapprove of the issuance of debt obligations of a government  
8 entity within the Executive Branch.

9 xviii. enter into a neutral evaluation process with one or more interested parties  
10 relating to a debt obligation of the Territory or an instrumentality of the  
11 Territory under which the participants, through an agreed upon process select  
12 a neutral evaluator to oversee the neutral resolution process and facilitate  
13 discussions and negotiations in good faith among the participants in an effort  
14 to resolve their disputes relating to the debt obligation and under which the  
15 neutral evaluator may make recommendations for a settlement or plan of  
16 readjustment. Provided, however, that use of a neutral evaluation process  
17 under this subparagraph (a)(xviii) does not restrict or otherwise prohibit other  
18 negotiations or agreements with an interested party relating to a debt  
19 obligation of the Territory or an instrumentality of the Territory.

20 xix. take action necessary to assure compliance with the Enabling Act of the  
21 Office of Management and Budget, Act No. 147 of June 18, 1980, as  
22 amended, not inconsistent with the provisions of this Act;

23 xx. require an officer, employee, agent, or contractor of the Territory or an  
24 instrumentality of the Territory to provide to the Oversight Board copies,

1                   whether written or electronic, of such records, documents, information, data,  
2                   as requested by the Oversight Board.

- 3                   xxi.   ensure the prompt and efficient payment and administration of taxes through  
4                   the adoption of electronic reporting, payment and auditing technologies;
- 5                   xxii.   prevent a transfer of property by an instrumentality of the Territory prohibited  
6                   under section 407(a) of PROMESA; and
- 7                   xxiii.   rescind an authorization approved by the Legislative Branch or the Executive  
8                   Branch after May 4, 2016 and before the effective date of this Act for the  
9                   unexecuted sale or transfer of the assets and liabilities of a government entity  
10                  within the Executive Branch, if the sale or transfer endangers the health,  
11                  safety, or welfare of the residents of Puerto Rico or impairs a bond, note,  
12                  security, or uncontested legal obligation of the government entity.

13                   **Section 207. Administrative and Financial Controls**

14                  (a)    During the Emergency Period, and without this section being construed as a  
15                  limitation to the powers of the Governor, the Governor shall exercise general supervisory control  
16                  over the functions and activities of all government entities within the Executive Branch.

17                  (b)    Without this section being construed as a limitation to the powers of the Governor, in  
18                  exercising general supervisory control under subsection (a) the Governor and/or the Authority may,  
19                  and are not limited to, do all of the following:

- 20                   i.     direct a government entity within the Executive Branch to reduce  
21                   expenditures through the implementation of administrative efficiencies;
- 22                   ii.    impose limits on contractual expenditures by government entities within the  
23                   Executive Branch;

- 1           iii.    order the lapse or return of unexpended multi-year appropriations to the
- 2                    general fund;
- 3           iv.    re-designate the special funds not considered part of the general fund as part
- 4                    of the general fund;
- 5           v.    prohibit the establishment of new program or expansion of a current program
- 6                    by a government entity within the Executive Branch;
- 7           vi.    issue directives for the allotment of appropriations;
- 8           vii.   transfer appropriated funds from one program to another within a government
- 9                    entity within the Executive Branch;
- 10          viii.   intervene in any matter touching functions and activities under subsection (a);
- 11                    and

#### 12           **Section 208. Enforcement and Executive Orders**

13           (a)    For purposes of this Chapter, each government entity within the Executive Branch  
14 shall be under the supervision of the Governor unless otherwise provided by the Constitution of  
15 Puerto Rico. The Governor shall transact all necessary business with the officers of governmental  
16 entities within the Executive Branch and may require information in writing from all executive and  
17 administrative officers of government entities within the Executive Branch relating to the  
18 compliance with this Chapter and upon any subject relating to the duties of their respective offices.

19           (b)    The Governor may initiate court proceedings in the name of the Territory to enforce  
20 compliance with any constitutional mandate or requirement of this Act, or to restrain violations of  
21 any constitutional mandate, duty, or right, or requirement of this Act by any officer of a  
22 governmental entity within the Executive Branch or a governmental entity within the Executive  
23 Branch.

1 (c) The Governor shall have power to inquire into the condition and administration of  
2 any public office of a government entity within the Executive Branch and the acts of any public  
3 officer of a government entity within the Executive Branch.

4 (d) The Governor may issue executive orders to implement or enforce compliance with  
5 this Chapter. An executive order issued under this section is binding on the officials, employees,  
6 agents, and contractors of a government entity within the Executive Branch. Officers of a  
7 government entity within the Executive Branch shall take and direct the action necessary and  
8 advisable to comply with an executive order issued under this section applicable to the government  
9 entity.

10 (e) The Governor may amend, rescind, or supersede an executive order issued under this  
11 Act or under the former Puerto Rico Emergency Moratorium and Financial Rehabilitation Act,  
12 which shall continue in full force and effect until amended, rescinded or superseded.

13 (f) To enforce compliance with this Chapter or an executive order issued under this  
14 Chapter, the Governor may initiate court proceedings in the name of the Territory.

15 **Section 209. Delegation**

16 The Governor may delegate to the Authority by Executive Order any power or duty  
17 contained in this Act, to the extent any such power or faculty has not already been delegated to the  
18 Authority herein or pursuant to Act No. 2-2017, all of which shall continue to be in full force and  
19 effect. A further delegation of a power or duty to Authority, does not limit or otherwise restrict the  
20 exercise by the Governor of powers or duties vested in the Governor by this Act or otherwise.

21 **Section 210. Hiring of Government Workers and Professional Persons; Exemption**  
22 **from other Laws.**

23 (a) At any time during an Emergency Period, the following acts or provisions thereof  
24 shall not apply to the hiring by the Governor, the Department of the Treasury, PRIFA, any



1 subsidiary of the Bank, and/or the Authority, on a temporary or permanent basis, of any individual  
2 that is employed by the Bank or any other government entity to work in the Governor’s office, the  
3 Department of the Treasury, PRIFA, any subsidiary of the Bank, and/or the Authority on matters  
4 related to the restructuring of any debt obligation or adjusting of any debt obligation, implementing  
5 liability management transactions for debt obligations, managing the fiscal affairs of the Territory or  
6 any government entity, or any matters otherwise related to functions or operations performed or  
7 carried out by the Bank under Act No. 17 of September 23, 1948, as amended, or Act No. 272 of  
8 May 15, 1945, as amended—

- 9 i. the “Public Service Human Resources Administration Act of the Commonwealth of  
10 Puerto Rico,” Act No. 184-2004, as amended;
- 11 ii. the “Act to Regulate the Transition Process of the Government of Puerto Rico,” Act  
12 No. 197-2002, as amended;
- 13 iii. Act 3-2017;
- 14 iv. items (b) and (c) of Article 4.6 of Act No. 1-2012, as amended, known as the “Puerto  
15 Rico Government Ethics Act of 2011”;
- 16 v. the “Commonwealth of Puerto Rico Government Fiscal Reform Act of 2006”, Act  
17 No. 103-2006, as amended;
- 18 vi. Plan 3-2011, as amended, known as the “Reorganization Plan of the General Services  
19 Administration”; and
- 20 vii. Act 78-2011, as amended, known as the “Electoral Code of Puerto Rico for the XXI  
21 Century”.

22 (b) The Governor, the Department of the Treasury, PRIFA, any subsidiary of the Bank,  
23 and/or the Authority may employ, retain, or honor existing obligations under and/or assume existing  
24 contracts of the Bank of any government entity with consultants and essential employees, including

1 legal and financial advisors, whether or not the salaries or fees were incurred prior to the date of  
2 such assumption, and may employ such consultants and essential employees to advise the Governor,  
3 the Bank or any government entity on matters related to restructuring or adjusting any debt  
4 obligation, implementing liability management transactions for debt obligations, managing the fiscal  
5 affairs of the Commonwealth and any government entity, or any matters otherwise related to  
6 functions or operations performed or carried out by the Bank under Act No. 17 of September 23,  
7 1948, as amended, or Act No. 272 of May 15, 1945, as amended. The Governor, the Department of  
8 the Treasury, PRIFA, any subsidiary of the Bank, and/or the Authority, as applicable, shall submit to  
9 the Office of Management and Budget an estimate of the total costs and expenses related to the  
10 contracts and obligations to be incurred or assumed pursuant to this Section for the remainder of this  
11 fiscal year 2016-2017. The Secretary of the Treasury and the Director of the Office of Management  
12 and Budget are hereby directed to identify from the fiscal year 2016-2017 budget the funds  
13 necessary to cover such expenses and/or to transfer to PRIFA, any subsidiary of the Bank, or the  
14 Authority sufficient funds to cover such expenses. Beginning in fiscal year 2017-2018, such  
15 expenses shall be paid from appropriations made by the Legislative Assembly. The laws and  
16 provisions listed in items (a) i. through vii. of this section shall not apply to the contracting or the  
17 assumption of obligations under this subsection.

18 **Section 211. Automatic Stay**

19 While the Enactment Stay under PROMESA is in effect, any action that would be enjoined  
20 by PROMESA in a federal, state, or Puerto Rico court also is enjoined under this Act, and any  
21 similar action arising out of, or related to, this Act is similarly enjoined while the Enactment Stay  
22 under PROMESA is in effect.

1                   **CHAPTER 3. REPEAL OF PROVISIONS OF MORATORIUM ACT.**

2                   **SECTION 301-** Chapters 1 and 2 of Act No. 21-2016, as amended, are hereby repealed.

3                   **CHAPTER 4.- AMENDMENT TO EDB ORGANIC ACT OF THE ECONOMIC**

4                   **DEVELOPMENT BANK FOR PUERTO RICO.**

5                   SECTION 401. To add a new Article 23 to the Organic Act of the Economic and  
6                   Development Bank, Act No. 22 of July 25, 1985, as amended, to read as follows:

7                   “ARTICLE 23.- Language Conflict.

8                   If in the interpretation or application of the amendments to this Act as enacted by Act No.  
9                   21-2016 any conflict arises between the English and Spanish texts, the English text shall govern.”

10                  Section 402.- Article 23 of the Organic Act of the Economic and Development Bank, Act  
11                  No. 22 of July 24, 1985, is hereby renumbered as Article 24.

12                   **CHAPTER 5. SEVERABILITY AND EFFECTIVENESS.**

13                   **Section 501. Severability**

14                  If any clause, paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section,  
15                  subsection, title, chapter, subchapter, heading, or part of this Act, were to be annulled or declared  
16                  unconstitutional, the order to such effect will neither affect nor invalidate the remainder of this Act.  
17                  The effect of such an order shall be limited to the clause, paragraph, subparagraph, sentence, word,  
18                  letter, article, provision, section, subsection, title, chapter, subchapter, heading, or part of this Act so  
19                  annulled or declared unconstitutional. If the application to a person or circumstance of any clause,  
20                  paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section, subsection, title, chapter,  
21                  subchapter, heading, or part of this Act, were to be annulled or declared unconstitutional, the order  
22                  to such effect will neither affect nor invalidate the application of the remainder of this Act to such  
23                  persons or circumstances to which it may be validly applied. It is the express and unequivocal intent  
24                  of this Legislative Assembly that the courts of law enforce the provisions and application of this act

1 to the greatest possible extent, even if any of its parts is annulled, invalidated, affected or declared  
2 unconstitutional, or even if the application thereof to any person or circumstance is annulled,  
3 invalidated or declared unconstitutional. This Legislative Assembly would have passed this Act  
4 regardless of the ruling on severability that a Court may issue.

5 **Section 502. Effectiveness**

6 This Act shall take effect immediately upon enactment.